

GUYANA

MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

(GY-L1009)

PROPUESTA DE PRÉSTAMO

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por Arnaldo Posadas (RE3/SC3), Jefe del Equipo del Proyecto; Adrienne Pratt (RE3/SC3); Ophelie Chevalier (RE3/SC3); Gonzalo Afcha (RE3/SC3); Diego Buchara (LEG); Javier Reyes (COF/CGY); Hugh Wilkinson (consultor); Mercedes Rochac (RE3/SC3); Adriana Abreu-Combs (RE3/SC3) y Patricia Sadeghi (RE3/SC3).

ÍNDICE

RESUMEN DEL PROYECTO

I.	MARCO DE REFERENCIA.....	1
A.	Introducción.....	1
B.	Contexto macroeconómico.....	2
C.	La administración de justicia.....	5
D.	Situación actual y principales desafíos de la administración de justicia	8
1.	Desafío 1: Fortalecimiento de la rendición de cuentas y eficiencia de la administración.....	8
2.	Desafío 2: Fortalecimiento de los vínculos entre las instituciones de la administración de justicia.....	10
3.	Desafío 3: Mejorar el acceso a la justicia.....	11
E.	Estrategia del país para la administración de justicia.....	12
F.	Estrategia del Banco para el país y el sector.....	13
G.	Estrategia del programa.....	14
H.	Coordinación con otros donantes.....	15
II.	EL PROGRAMA.....	16
A.	Objetivos y descripción.....	16
B.	Estructura del programa.....	16
1.	Componente de reformas de política.....	16
2.	Inversiones y apoyo técnico.....	17
C.	Costo y financiamiento.....	24
III.	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.....	26
A.	El prestatario y el organismo ejecutor.....	26
B.	Ejecución y administración del proyecto.....	26
C.	Adquisición de bienes y servicios.....	28
D.	Períodos de ejecución y desembolso.....	28
E.	Seguimiento y evaluación.....	31
IV.	VIABILIDAD Y RIESGOS.....	33
A.	Viabilidad institucional.....	33
B.	Viabilidad socioeconómica.....	34
C.	Viabilidad financiera.....	36
D.	Impacto ambiental.....	36
E.	Beneficios y beneficiarios.....	36
F.	Riesgos.....	37

V.	MATRIZ DE POLÍTICAS.....	39
----	--------------------------	----

ANEXOS

Anexo I Marco lógico

Proyecto de resolución

Referencias electrónicas

Datos socioeconómicos básicos	http://www.iadb.org/RES/index.cfm?fuseaction=externallinks.countrydata
Estado de los préstamos en ejecución y los préstamos aprobados	http://portal.iadb.org/approvals/pdfs/GYsp.pdf
Programa tentativo de financiamiento	http://opsgsl/ABSPRJ/tentativelending.ASP?S=GY&L=SP
Información disponible en los archivos técnicos de RE3/SC3	http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=723025
Carta de política	http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=743531
Análisis macroeconómico (confidencial)	http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=754029
IMF Guyana Fifth Review (confidencial)	http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=754009
Resumen del programa	http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=744651
Plan de adquisiciones	http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=749716

SIGLAS Y ABREVIATURAS

DELP	Documento de estrategia de lucha contra la pobreza
FMI	Fondo Monetario Internacional
FOE	Fondo para Operaciones Especiales
IVA	Impuesto sobre el valor agregado
JSC	Comisión de Servicios Judiciales (Judicial Service Commission)
ONG	Organización no gubernamental
PIB	Producto interno bruto
SCLP	Servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza
UEP	Unidad de ejecución del proyecto
USAID	Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

RESUMEN DEL PROYECTO

GUYANA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (GY-L1009)

Términos y condiciones financieras ¹				
Prestatario: La República Cooperativa de Guyana Organismo ejecutor: Ministerio de Asuntos Jurídicos			Plazo de amortización:	40 años
			Período de gracia:	10 años
			Período de desembolso:	
Fuente	Monto (en US\$)	%	- Componente de reformas de política:	3 años
BID (FOE)	25.000.000	100	- Componente de inversiones:	4 años
Componente de reformas de política	15.000.000	59	Tasa de interés:	1% durante los primeros 10 años, 2% en adelante
Componente de inversiones	10.000.000	40	Inspección y vigilancia:	1%
Local	232.000	1	Comisión de crédito:	0,5%
Total	25.200.000	100	Moneda:	US\$ u otras monedas para el FOE
Esquema del proyecto				
Objetivo del proyecto: El objetivo general del programa es mejorar el clima de inversiones y el imperio de la ley en Guyana mediante la mejora de la gobernanza del sector público.				
Condiciones contractuales especiales: Véanse los párrafos 3.14, 3.15 y 3.16. En el caso del componente de reforma de políticas, los desembolsos se realizarán en dos tramos conforme a las condiciones descritas en la Matriz de Políticas (Cuadro V-1). Para el componente de inversiones, el primer desembolso está sujeto a las siguientes condiciones: i) prueba de que se han creado y dotado de personal las Unidades de Ejecución de Proyectos en el Tribunal Superior de Justicia y el Ministerio de Asuntos Jurídicos; ii) prueba de que el Comité Directivo de la Estrategia de Reforma de la Administración de Justicia y su Secretaría Técnica se han creado, dotado de personal y puesto en funcionamiento; iii) prueba de que se ha adoptado el manual de operaciones del programa; y iv) prueba de que se ha suscrito un convenio entre el Ministerio de Asuntos Jurídicos y el Tribunal Superior sobre la transferencia de recursos y la ejecución del programa. Una vez que entre en vigencia el contrato de préstamo y que el prestatario haya dado cumplimiento a las condiciones generales previas al primer desembolso, se recomienda que el Directorio Ejecutivo autorice un desembolso especial al prestatario de hasta US\$300.000 con cargo a los recursos del Banco, para instaurar la Secretaría Técnica y las unidades de ejecución del proyecto y ayudar al organismo ejecutor a cumplir las condiciones especiales previas al primer desembolso. Antes del llamado a licitación para llevar a cabo las mejoras físicas de las salas de juzgados previstas en el Subcomponente 1 del programa, el prestatario presentará, a satisfacción del Banco, prueba de que se han cumplido las siguientes condiciones: i) se han formulado y aprobado las políticas de gobernanza y normas operativas de la Secretaría de la Comisión de Servicios Judiciales (JSC); ii) la Secretaría del Tribunal Superior ha adoptado un manual interno de gestión financiera a fin de velar por la debida gestión de los recursos financieros dentro del Poder Judicial, en consonancia con las disposiciones de la Ley de gestión y responsabilidad fiscal de 2003 y los reglamentos y circulares de finanzas expedidos en virtud de la misma; y iii) se ha creado una unidad de auditoría interna en la Secretaría del Tribunal Superior para efectuar auditorías internas en todo el Poder Judicial, incluso en todas las oficinas de tribunales en que se administren recursos financieros.				

Excepciones a políticas del Banco:

Ninguna.

El proyecto es coherente con la estrategia de país: Sí [X] No []

El proyecto califica como: SEQ [] PTI [] Sector [] Geográfica [] % de beneficiarios []

Fecha de verificación del CESI: 10 de marzo de 2006

Adquisiciones: Véanse los párrafos 3.7-3.9. Las adquisiciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de conformidad con las políticas vigentes del Banco para las adquisiciones de obras y bienes y la selección y contratación de consultores

¹ La tasa de interés, la comisión de crédito, y la comisión de inspección y vigilancia que se mencionan en este documento se establecen según lo dispuesto en el documento FN-568-3-Rev. El Directorio Ejecutivo puede modificarlas tomando en consideración los antecedentes existentes a la fecha, así como la respectiva recomendación del Departamento de Finanzas. En ningún caso la comisión de crédito podrá superar el 0,75%, ni la comisión de inspección y vigilancia el 1%. (*)

(*) En lo que respecta a la comisión de inspección y vigilancia, en ningún caso el cargo podrá superar en un semestre dado el monto que resultaría de aplicar el 1% al monto del préstamo, dividido por el número de semestres incluido en el plazo original de desembolso.

I. MARCO DE REFERENCIA

A. Introducción

- 1.1 Las instituciones de la administración de justicia de Guyana han hecho un esfuerzo considerable para mantener el orden público y administrar justicia, a pesar de contar con recursos muy limitados. Sin embargo, aún quedan por superar desafíos de importancia que inciden directamente en la vida cotidiana de la población de Guyana y en el desarrollo económico del país. Según una encuesta reciente entre las empresas manufactureras de Guyana, el 43% de las que habían recurrido a los tribunales durante los dos últimos años, señaló que el ordenamiento jurídico y la solución de diferencias en Guyana eran un obstáculo importante o muy serio para su actividad comercial¹. En la actualidad, la solución de un litigio de pago en Guyana demora 525 días (mucho más que en otros países del Caribe que tienen similares ordenamientos jurídicos de tradición anglosajona) y el costo directo del proceso es equivalente a casi un cuarto del valor de la deuda². Del mismo modo, la delincuencia se encuentra entre los cinco condicionamientos más importantes para la actividad comercial en el país: el 30% de las empresas manufactureras considera que es un obstáculo significativo o muy serio para su actividad y el 38% había sido víctima de robos o actos de vandalismo en el año previo. Los elevados índices de delincuencia, que inciden sustancialmente en la calidad de la vida en Guyana, son un factor más que desalienta las inversiones y (según datos anecdóticos) agrava el problema de la emigración. Se cree que uno de los factores que explican los elevados índices de delincuencia es que a los delincuentes detenidos no se les aplica una justicia rigurosa.
- 1.2 El Gobierno de Guyana ha adoptado una clara decisión sustantiva según la cual la superación de estos desafíos debe ser un componente clave de la estrategia nacional de desarrollo. En el documento de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP) de 2001 se reconoce que la seguridad pública y el acceso a la justicia son uno de los cinco problemas de gobernanza que deben abordarse para alcanzar las metas gubernamentales de reducción de la pobreza. En ese contexto, el gobierno ha solicitado el apoyo del Banco para la preparación y el financiamiento de un programa de modernización de la administración de justicia.
- 1.3 Como parte de la preparación para este programa, el país está ejecutando un proyecto de cooperación técnica con financiamiento del Banco (ATN/SF-9163-GY) para apoyar la adopción de una amplia Estrategia de Reforma de la Administración de Justicia, aprobada por el gabinete el 6 de junio de 2006. La estrategia se elaboró mediante un amplio proceso de consulta en el que participaron todas las instituciones de la administración de justicia, así como otros interesados directos, incluidos la sociedad civil y el sector privado. Por primera vez, se presenta

¹ Banco Mundial, Evaluación del clima de negocios en Guyana, 2006.

² Banco Mundial, base de datos Doing Business.

un método integral y sistémico para abordar los problemas que afectan a la administración de justicia, estableciéndose prioridades para las actividades de reforma en función de un análisis intersectorial y no de evaluaciones institucionales individuales. En la Estrategia de Reforma de la Administración de Justicia se enuncian: i) el enfoque del gobierno para abordar sistemáticamente los desafíos que enfrenta el sector en la actualidad; ii) un marco normativo para la reforma y coordinación estratégica; iii) un plan de acción con prioridades y costos, y iv) un mecanismo de rendición de cuentas y seguimiento para impulsar la reforma.

- 1.4 Este programa servirá para apoyar las medidas iniciales encaminadas a la aplicación de la Estrategia mediante la adopción de reformas de política fundamentales y el fortalecimiento del marco operativo e institucional del sector. Los tres desafíos estratégicos principales que se mencionan en la Estrategia de Reforma de la Administración de Justicia conforman la base de los objetivos, componentes y actividades del programa.

B. Contexto macroeconómico

- 1.5 **Crecimiento económico e inversiones.** El contexto macroeconómico de Guyana varió sustancialmente entre los períodos de 1991-1997 y 1998-2005. Si bien de 1991 a 1997 la tasa media anual de crecimiento económico fue de 7,1%, de 1998 a 2005 esta tasa se redujo a tan sólo el 0,2%. La inversión nacional perdió dinamismo, reduciéndose en 12,8% del PIB durante el mismo período, debido, en gran parte, a una disminución de la inversión privada de alrededor de 11% del PIB. Los flujos de IED declinaron a 6,6% del PIB en 1998-2005, en comparación con un nivel anterior de 19%. Sin embargo, la inversión pública se expandió rápidamente en los últimos años, del 12,6% del PIB en 2002 al 24,5% en 2005, lo que sugiere un posible desplazamiento de la inversión privada. El deterioro del entorno exterior es un factor clave que explica el débil crecimiento económico de Guyana desde finales de los años noventa, en especial las condiciones meteorológicas desfavorables y un significativo empeoramiento de la relación de intercambio del país, que plasma las caídas de precios de sus principales productos básicos de exportación³. Al propio tiempo, el empeoramiento de las condiciones políticas y de seguridad internas marca una diferencia sustancial entre los períodos de fuerte y débil crecimiento económico del país. La situación se deterioró radicalmente en 2005, cuando las fuertes inundaciones y el alza de los precios del petróleo tuvieron una importante incidencia negativa en el sector agrícola, especialmente el del azúcar, y en el resto de la economía. En consecuencia, se estima que el PIB disminuyó un 2,8% en 2005. Si bien se prevé que en 2006 la economía se recuperará de esta contracción, el grado de crecimiento se verá limitado por las nuevas inundaciones de enero, la persistencia de unos elevados precios mundiales del petróleo y la reducción de los

³ El sector de las exportaciones se concentra en gran medida en el azúcar, el arroz, la bauxita y el oro. La relación de intercambio se redujo marcadamente entre 1999-2000 (19%) y 2004-2005 (11%).

precios preferenciales del azúcar por parte de la Unión Europea⁴. Se prevé que la inflación se mantendrá en su nivel actual (véanse los Indicadores Macroeconómicos en el Cuadro I-1).

- 1.6 **Política fiscal y sostenibilidad de la deuda.** La situación fiscal del país se ha ido deteriorando en los últimos siete años; así, el déficit pasó del 1,7% del PIB en 1999 al 8,7% del PIB en 2003 y, a pesar de una recuperación en 2004, llegó al 13,4% del PIB en 2005. Además, la relación deuda externa pública/PIB aumentó al 148% en 2005 (137% en 2004). Los aumentos de sueldos en el sector público, el gasto social y las inversiones de capital (en particular proyectos de infraestructura y la fábrica de azúcar Skeldon), así como las operaciones de socorro durante la inundación de 2005, contribuyeron al aumento de los déficit, a pesar de los altos ingresos fiscales registrados recientemente. Si bien la Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados (PPME) y la Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral (IADM) ya han reducido el valor neto actualizado (VNA) de la relación entre deuda externa e ingresos a aproximadamente 205% para 2011 —nivel inferior al umbral indicativo de 250%—, Guyana presenta todavía un riesgo moderado de sobreendeudamiento⁵. No obstante, los indicadores del servicio de la deuda siguen siendo inferiores a sus umbrales respectivos, lo que sugiere que los pagos del servicio de la deuda son controlables. Se prevé que, en promedio, la IADM generará economías en el servicio de la deuda de casi US\$10 millones anuales en 2006-2010, equivalentes a cerca del 1% del PIB.
- 1.7 **Brecha de financiamiento externo.** Como consecuencia del alza de los precios mundiales de los combustibles y de la ejecución del proyecto Skeldon, se estima que en 2006 el déficit externo será superior al consignado en proyecciones anteriores del FMI, lo que producirá un aumento de la brecha de financiamiento externo. Al propio tiempo, los análisis de sostenibilidad de la deuda muestran que Guyana debe adoptar criterios prudentes en materia de nuevo endeudamiento a corto plazo, incluso después de la IADM. Según las proyecciones del FMI, la brecha de financiamiento externo ascenderá a US\$46 millones en 2006 (5,5% del PIB), pero descenderá a US\$8 millones para 2009 (aproximadamente 1% del PIB). El déficit en cuenta corriente (antes de las subvenciones) se reducirá al 14% del PIB en 2009 (desde un 26,5% en 2006) gracias al ajuste fiscal, un crecimiento económico más vigoroso y la reducción gradual de las grandes importaciones de capital vinculadas con el proyecto Skeldon. Los posibles desembolsos del SCLP, el alivio de la deuda de la IADM y el apoyo adicional de balanza de pagos de los donantes reducirían en parte la brecha de financiamiento. Para 2006, la participación del FMI en el apoyo externo destinado a solventar esa brecha equivaldría a casi el 58%, mientras que la participación del BID sería de

⁴ El azúcar, principal producto de exportación de Guyana, representa aproximadamente un cuarto de las exportaciones totales. Se prevé que las exportaciones de azúcar, que en el período 2002-2004 alcanzaron un promedio del 17% del PIB, se reducirán al 13% en el período 2009-2010.

⁵ Guyana sigue siendo vulnerable a trastornos exógenos tales como la depreciación del tipo de cambio y el deterioro de la relación de intercambio y del nivel de endeudamiento, entre otros.

aproximadamente 17%. El resto se podría cubrir con el alivio de la deuda como parte de la IADM (alrededor de US\$8 millones)⁶.

Cuadro I-2
Guyana: Requisitos y fuentes de financiamiento externo¹
(en millones de US\$)

	2006	2007	2008	2009
Necesidad de financiamiento	265	217	188	178
Financiamiento disponible ²	219	188	168	169
Transferencias oficiales	62	44	36	26
Préstamos no financieros sector público	88	82	79	94
Cuenta GUYSUCO ³	22	21	7	0
Sector privado (neto) ⁴	45	41	45	49
Brecha de financiamiento	46	29	20	8
De la cual				
- Desembolso FMI	27	0	0	0
- Préstamos en apoyo de reformas de políticas en el inventario del BID	8	5	20	0
Otros	11	24	0	8

¹ Sobre la base del Quinto Examen del SCLP para Guyana (enero de 2006) y proyecciones hechas por funcionarios del BID.

² Los totales pueden variar debido a redondeo de cifras.

³ Se refiere a las cuentas de retención y de depósito en garantía de la compañía azucarera del Estado.

⁴ Incluye cambio de activos extranjeros netos de los bancos comerciales, flujos a corto plazo y créditos de comercio, inversiones extranjeras directas y errores y omisiones de la balanza de pagos.

- 1.8 **Justificación del préstamo del BID.** El resurgimiento de la inversión del sector privado es la clave para reactivar el crecimiento económico de Guyana. Además de contribuir a la reducción de la brecha de financiamiento de Guyana, esta y otras operaciones del programa actual del BID —en especial, los préstamos en apoyo de reformas de política— tienen por finalidad mejorar el clima de inversiones mediante el apoyo a reformas institucionales y de políticas. Las intervenciones financiadas por el BID estarán destinadas a eliminar los principales obstáculos al crecimiento en términos de competitividad del sector privado, condiciones institucionales (especialmente de la administración de justicia), eficiencia del sector público, seguridad, capacitación de la fuerza de trabajo e infraestructura física.
- 1.9 El saldo fiscal es una preocupación constante para Guyana. Con esta operación se reforzará el compromiso de las autoridades con una política fiscal sostenible, mediante la inclusión de un marco macroeconómico coherente en las condiciones aplicables a los tramos. Por otra parte, Guyana tiene previsto adoptar un IVA en

⁶ Guyana podría también acceder a potenciales importaciones de combustible en el marco del Acuerdo de PetroCaribe.

enero de 2007, medida que se considera una reforma estructural clave en el marco del actual SCLP⁷. El IVA realzará la eficiencia del régimen tributario y ampliará la base impositiva mediante la incorporación de casi todos los servicios y de los sectores mayoristas y minoristas en calidad de contribuyentes. Por medio del proceso de programación también se está brindando apoyo a otras medidas correctivas, incluida la asignación de prioridad al programa de inversiones públicas⁸. El programa de inversiones financiado por el BID ya está incluido en el Programa Quinquenal de Inversión Pública (reducido) aprobado en enero de 2006 junto con el presupuesto y marco económico de mediano plazo de Guyana. Asimismo, la hipótesis de desembolsos para el programa de inversiones de 2006 financiado por el BID indica que el grueso de los recursos se desembolsaría después de 2008, lo que coincidiría con la proyectada mejora gradual del déficit fiscal (del 13,6% del PIB en 2006 al 2,7% del PIB en 2010). De esta manera, el financiamiento del BID limitará las presiones fiscales inmediatas, que podrían tener efectos negativos sobre la sostenibilidad de la deuda.

- 1.10 **Acuerdo con el FMI en el marco del servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza (SCLP).** En la actualidad, Guyana participa en un acuerdo con el FMI en el marco del SCLP, que vencerá en septiembre de 2006. Según el Quinto Examen efectuado en el marco del servicio, el programa de Guyana con el FMI está bien encaminado⁹. Se prevé que el Sexto Examen finalice en septiembre de 2006¹⁰. En las conclusiones preliminares de una evaluación *ex post* de la participación a más largo plazo en los programas con el FMI se sugiere que la ejecución deficiente, sumada a acontecimientos exógenos externos de carácter negativo, fueron las principales causas de que los programas no cumplieran sus objetivos, si bien el diseño de los programas se podría haber mejorado. A esta altura, no queda claro qué forma adoptará en el futuro la relación entre el FMI y Guyana. En el informe de la evaluación *ex post* se estima que el arreglo más adecuado en esta etapa sería un SCLP de acceso reducido sujeto a ciertas condiciones. Otras opciones para continuar la relación podrían ser el Instrumento de Apoyo a la Política Económica (que no entraña apoyo financiero) o una supervisión intensiva.

C. La administración de justicia

- 1.11 Se considera, en general, que la administración de justicia está formada por las instituciones del Estado que participan directamente en la fiscalización, adquisición y prestación de servicios vinculados con la justicia. Estos servicios abarcan desde la

⁷ La misión del FMI para el Sexto Examen evaluará los avances hacia la aplicación del IVA para enero de 2007.

⁸ El BID y las autoridades de Guyana están examinando actualmente las medidas encaminadas a reducir el gasto público a fin de compensar todo préstamo adicional para inversiones (aproximadamente US\$26 millones) que surja de la asignación del Fondo para Operaciones Especiales (FOE) para 2006.

⁹ El informe del Quinto Examen en el marco del SCLP se publicó en enero de 2006.

¹⁰ Se ha programado una misión para que lleve a cabo este examen a principios de junio de 2006.

investigación y el enjuiciamiento de presuntos delitos hasta la solución de litigios entre personas naturales u organismos. Pueden incluir prevención, disuasión, arbitraje, mediación, conciliación, intervención judicial, restitución, indemnización por daños y perjuicios, sanciones y educación. A continuación se brinda una breve reseña de las instituciones que integran la administración de justicia.

- 1.12 *Los tribunales:* En Guyana, hay tres instancias de tribunales: el Tribunal de Apelaciones, el Tribunal Superior de Justicia (ambos conforman el Tribunal Supremo) y los tribunales de primera instancia (*Magistrates Courts*). La función del *Tribunal de Apelaciones* es conocer de los recursos de apelación del Tribunal Superior y entender, en última instancia, en causas civiles y penales. Por mandato constitucional, el Tribunal de Apelaciones está presidido por el Presidente (*Chancellor*, la máxima autoridad del Poder Judicial) y cinco jueces de apelación.
- 1.13 El *Tribunal Superior de Justicia* se compone del Presidente y once jueces asociados (Puisne). Su función es la de entender en causas por delitos graves (es decir, delitos sancionados con más de cinco años de prisión), causas civiles que estén fuera de la jurisdicción de los tribunales de primera instancia (G\$50.000), causas administrativas y apelaciones del tribunal de primera instancia. En Guyana, hay tres centros del Tribunal Superior y dos Secretarías. Los *tribunales de primera instancia* atienden aproximadamente el 90% de los litigios en Guyana, a saber: i) en materia penal, en delitos leves y más graves (que pueden ser sancionados hasta con cinco años de prisión) e instrucción preliminar de delitos graves (es decir, audiencias preliminares de causas que se remiten al Tribunal Superior para el juicio plenario) y ii) en materia civil, en demandas pecuniarias de un monto inferior a G\$50.000 (US\$250), algunos juicios por posesión de tierras y juicios de derecho de familia (por ejemplo, sentencias de separación, alimentos y tenencia de hijos). Guyana se divide en ocho distritos de primera instancia (*magisterial districts*). Los tribunales de primera instancia entienden tanto en causas civiles como penales.
- 1.14 Guyana cuenta con aproximadamente 1,7 jueces por cada 100.000 habitantes (3,5 si se tiene en cuenta a los jueces de los tribunales de primera instancia), esto es, un Poder Judicial relativamente pequeño si se lo compara con el de otros países de la región como Trinidad y Tobago (6,3), República Dominicana (7) y Saint Kitts y Nevis (15).
- 1.15 La *Comisión de Servicios Judiciales* (*Judicial Service Commission*, JSC) es un órgano creado por mandato constitucional, facultado para designar jueces e imponer sanciones disciplinarias a los funcionarios del Poder Judicial. Para los cargos de menor jerarquía, la JSC actúa en forma directa, mientras que, con respecto a los funcionarios de jerarquía superior, lo hace mediante una recomendación al Presidente. La JSC está integrada por el Presidente (*Chancellor*), el Juez Presidente y el Presidente de la Comisión de Administración Pública en calidad de miembros natos, junto con un máximo de tres miembros designados por el Presidente.

- 1.16 El *Ministerio de Asuntos Jurídicos (Ministry of Legal Affairs, MLA)* tiene por función velar por que haya un régimen adecuado de administración de justicia, brindar asesoramiento y servicios jurídicos y representar al Estado, prestar servicios de registro público y redactar proyectos de ley con destino al Parlamento. Al Ministro de Asuntos Jurídicos —que es también el Procurador General *ex officio*— le incumbe la responsabilidad de rendir cuentas ante el Parlamento y el Gabinete en nombre de todas las instituciones de la administración de justicia que no estén representadas de otra manera ante esos organismos.
- 1.17 La *Fiscalía (Department of Public Prosecutions, DPP)* fiscaliza todas las actuaciones penales y brinda asesoramiento jurídico en materia penal a la Policía y a otros organismos encargados de la aplicación de la ley. Asimismo, le incumbe la responsabilidad de incoar querellas y, cuando se considera que va en interés de la justicia, asume las acciones penales incoadas por la Policía. En la práctica, los fiscales de la Policía actúan en juicios ante los tribunales de primera instancia y la Fiscalía en acciones ante el Tribunal Superior.
- 1.18 El *Comité de Profesionales del Derecho*, creado en virtud de la Ley de ejercicio de las profesiones jurídicas, administra el régimen disciplinario de los abogados. El Comité está formado por tres miembros *ex officio* (incluido el Procurador General) y no más de 12 abogados en ejercicio. El Comité puede formular recomendaciones a los jueces del Tribunal Supremo, que determinan si se deben proseguir las actuaciones. En la actualidad, hay entre 175 y 200 abogados en ejercicio, 30% de los cuales son miembros del Colegio de Abogados (la afiliación al Colegio es voluntaria).
- 1.19 Además de las instituciones antes indicadas, que se benefician directamente del programa, hay otras que cabe mencionar porque son componentes importantes de la administración de justicia: la *Fuerza de Policía de Guyana* (cuyo jefe ejecutivo es un Comisario que depende del Ministerio de Asuntos Interiores) vela por la prevención y detección del delito, la protección del orden público, la represión de disturbios internos, la protección de la propiedad, el arresto de los delincuentes y la debida aplicación de la ley. El *Servicio Penitenciario de Guyana* administra seis establecimientos penitenciarios que actualmente alojan a 1.482 reclusos. De ellos, 450 están en régimen de prisión preventiva (a la espera de juicio). El *Servicio de Libertad Vigilada* presenta dictámenes a jueces y magistrados a efectos de sentencia y también en las causas de derecho de familia llevadas ante el Tribunal Superior; su jefe ejecutivo es el Oficial Principal de Libertad Vigilada y Bienestar Familiar. Si bien el programa no colaborará en forma directa con ellas, estas instituciones se beneficiarán de manera indirecta de las mejoras en la coordinación de la administración de justicia y de las iniciativas de asignación de recursos contempladas en la operación.

D. Situación actual y principales desafíos de la administración de justicia

- 1.20 La experiencia del Banco en la promoción del imperio de la ley ha demostrado que “los elementos centrales de una administración de justicia que cumpla su cometido de forma efectiva son la equidad, la imparcialidad, la sensatez en las decisiones, la accesibilidad, la eficiencia, la independencia, la transparencia y la credibilidad”¹¹. La administración de justicia de Guyana enfrenta desafíos en prácticamente todas estas esferas.

1. Desafío 1: Fortalecimiento de la rendición de cuentas y eficiencia de la administración

- 1.21 Un examen general de la administración de justicia de Guyana revela deficiencias graves en la prestación de servicios. De hecho, es evidente que las funciones esenciales para la administración eficiente y eficaz de la justicia no se están desempeñando como corresponde. Un síntoma de esas deficiencias que se suele mencionar es el gran número de causas acumuladas. En los últimos años se logró reducir en parte el número de causas acumuladas ante el Tribunal Superior mediante un programa de aumento de las horas de trabajo, pero aún quedan unas 12.000 causas pendientes de resolución.
- 1.22 Varias cuestiones intersectoriales contribuyen de manera fundamental a la deficiente administración de la justicia e influyen en las instituciones del sector. En la Estrategia de Reforma de la Administración de Justicia se han precisado todas estas cuestiones, que a continuación se describen sucintamente:
- a. **Subfinanciamiento crónico.** La administración de justicia ha estado subfinanciada durante decenios (Guyana asigna al Poder Judicial el 0,6% del gasto público total)¹². Además, causan especial preocupación las normas que rigen la aprobación y ejecución del presupuesto de la justicia. Si bien la Constitución crea un poder judicial administrativamente autónomo¹³, el Ministro de Finanzas asigna y revisa periódicamente el financiamiento del Poder Judicial (excepto los sueldos de los jueces) del mismo modo que todos los demás gastos públicos. Otro factor que explica el limitado control que el Poder Judicial ejerce sobre el proceso de asignación y ejecución de su presupuesto es su propia falta de capacidad de planificación a mediano plazo y de gestión presupuestaria general (no existe un comité del presupuesto en el tribunal ni una función formal de auditoría interna; de ahí las deficiencias en

¹¹ *IDB Experience in Justice Reform: Lessons Learned and Elements for Policy Formulation*, Christina Biebesheimer, J. Mark Payne. Noviembre de 2001 (pág. 4).

¹² Esta cifra es significativamente inferior a las asignaciones de otros países de la región, como Bahamas (3,18%), República Dominicana (1,23%) o Santa Lucía (1,75%).

¹³ Artículo 122^a (2): “Todos los tribunales serán administrativamente autónomos y serán financiados por un cargo directo sobre el Fondo Consolidado; y dichos tribunales operarán de conformidad con los principios de una sólida gestión financiera y administrativa”.

la capacidad de planificación presupuestaria, la supervisión financiera y la presentación de informes).

- b. **Escasez de recursos humanos.** Todas las instituciones de la administración de justicia se enfrentan con graves dificultades a la hora de contratar, motivar y retener personal de alto nivel en todas las categorías (de ahí el alto porcentaje de puestos vacantes, que oscila entre el 5% y el 50%). Esta escasez de personal atenta contra la prestación de servicios fundamentales. Los motivos que suelen citarse para dar cuenta del gran número de vacantes son la exigua remuneración y las escasas oportunidades de capacitación y ascenso. En los tribunales, el personal auxiliar se considera parte de la administración pública, lo que impide que el Poder Judicial ejerza autoridad suficiente sobre los agentes que prestan servicios de apoyo.
- c. **Normas procesales anticuadas.** Diversas leyes de procedimiento judicial coadyuvan a las demoras. Aunque habitualmente se instituyen procedimientos para garantizar sentencias justas e imparciales, bien se podrían instituir mejoras en los juicios civiles y penales en consonancia con las prácticas óptimas internacionales. Entre esas mejoras cabría incluir la gestión del flujo de expedientes (para todas las causas); una modalidad de “sinceramiento”¹⁴ (en causas civiles), y un régimen que limite el plazo de prisión preventiva en las causas ante el tribunal de primera instancia, reforme el sistema de instrucción preliminar para delitos graves y establezca directrices sobre sentencias (en causas penales).
- d. **Falta de plazos perentorios para las decisiones judiciales.** Si bien la JSC goza de la facultad constitucional de iniciar procesos disciplinarios contra los jueces por “faltar sistemáticamente a su deber de dictar sentencia”, esta función cuenta con exíguo apoyo institucional. La JSC carece de capacidad administrativa: no existe una Secretaría permanente de la JSC que reciba recursos contra los funcionarios del Poder Judicial y efectúe su seguimiento. Además, la JSC no dispone de reglamentos o procedimientos disciplinarios claros.
- e. **“Lagunas” institucionales en la prestación de servicios.** Ciertas funciones fundamentales para una administración eficaz y eficiente de justicia no se desempeñan como corresponde. Una de las deficiencias más importantes se relaciona con las decisiones independientes sobre el enjuiciamiento de presuntos delincuentes, dado que la policía las hace cumplir a nivel de los tribunales de primera instancia. Ello significa que una sola institución desempeña las funciones de investigación y enjuiciamiento en la mayoría de

¹⁴ El enfoque de “sinceramiento” hace referencia a las normas según las cuales las partes deben dar a conocer los detalles de su argumentación jurídica en la fase prejudicial del juicio. Está destinado a fomentar la solución extrajudicial del litigio, de modo que las causas que llegan al tribunal se limiten a los aspectos realmente litigiosos.

la causas, lo que contradice las prácticas óptimas internacionales. Otra laguna institucional tiene que ver con las funciones de planificación y formulación de políticas de la administración de justicia que forman parte de la misión formal del Ministerio de Asuntos Jurídicos (MLA). En la actualidad, este Ministerio carece de la capacidad necesaria para realizar estas tareas y se ocupa más bien de prestar servicios jurídicos al Estado. Sin embargo, la mayoría de las actividades relacionadas con el sector requieren la intervención del MLA, sea en el ámbito de las políticas (en tanto ministerio responsable de algunas de los elementos esenciales de la reforma legislativa que se llevará adelante en el marco de la Estrategia) o en el de la inversión.

- f. **Otras deficiencias institucionales**, tales como falta de un sistema moderno de gestión del flujo de expedientes, carencias del sistema de recopilación y análisis de datos estadísticos, persistencia de procedimientos administrativos manuales engorrosos, inadecuación de los sistemas de administración de tribunales, mantenimiento insuficiente de la infraestructura física, escasez de equipo básico y falta de interacción entre homólogos y de intercambio de conocimientos.

2. Desafío 2: Fortalecimiento de los vínculos entre las instituciones de la administración de justicia

- 1.23 Los desafíos que enfrenta la administración de justicia se han analizado en gran medida en estudios anteriores, centrados por lo común en instituciones determinadas. Hasta el examen reciente de un plan estratégico para este sector, no había habido consenso respecto de las repercusiones relativas de los problemas que aquejan a la administración de justicia y sus posibles soluciones. Las opiniones expresadas han tendido a concentrarse en las prioridades institucionales y respuestas a problemas de carácter específico.
- 1.24 Si bien es cierto que muchos problemas de la administración de justicia responden a deficiencias de capacidad en distintas instituciones, también es cierto que la gestión de una institución depende en gran medida del desempeño de muchas otras. El contexto específico de la justicia penal es un claro ejemplo de lo anterior. Las deficiencias de que adolece la investigación policial en las primeras etapas de un asunto suelen redundar en problemas y demoras cuando éste llega a juicio y pueden dar lugar a que se desestime la acción, con la consiguiente pérdida de tiempo para la justicia. Desde el punto de vista de la Policía, hay pocos incentivos para efectuar detenciones si los magistrados conceden libertad bajo fianza con demasiada facilidad, dando así a los delincuentes la oportunidad de reincidir.
- 1.25 Existe, pues, un amplio margen para encarar los problemas mediante cambios administrativos que hagan hincapié en el modo en que las distintas instituciones de la administración de justicia se relacionan entre sí. Entre los ámbitos operativos donde existe margen para una mayor coordinación se pueden mencionar los siguientes:

- a. La formulación de políticas y el diseño de estrategias a nivel de toda la administración de justicia.
- b. La transferencia de expedientes entre instituciones (por ejemplo, la Policía y la Fiscalía) para velar por que no se extravíen los archivos y/o expedientes.
- c. La mejora y coordinación de los registros a fin de realzar el intercambio de información (y la recopilación de datos estadísticos) entre las instituciones de la administración de justicia.
- d. Una mejor comunicación entre la Policía, el Servicio Penitenciario y el tribunal de primera instancia a la hora de presentar causas para instrucción preliminar, con miras a asegurar que la causa no se eleve hasta que el acusado, los testigos y la Policía estén en condiciones de comparecer ante los tribunales.
- e. La comunicación entre el Servicio Penitenciario y el Tribunal respecto del tiempo que lleva un acusado en prisión preventiva para determinar la urgencia de entender en la causa.
- f. La mejora de la información que proporciona la Fiscalía a la Secretaría del Tribunal Superior, incluso la fecha del auto de procesamiento, para facilitar la selección de causas que han de juzgarse.

3. Desafío 3: Mejorar el acceso a la justicia

- 1.26 El acceso a la justicia —entendido como la capacidad de las personas de ejercer sus derechos o solucionar sus litigios por medio de la administración de justicia, sin distinción de etnia, raza, género o situación socioeconómica— sigue siendo un desafío en Guyana. Gracias a las consultas que se celebraron con el correr de los años, se han detectado varios obstáculos importantes para un mejor acceso a la justicia:
- a. **Estructuras deficientes para regular el ejercicio de la abogacía.** En virtud de la Ley de ejercicio de las profesiones jurídicas se estableció el Comité de Profesionales del Derecho; sin embargo, hoy día el comité no funciona con eficacia como órgano normativo de la profesión. Por ejemplo, no se fiscaliza la calidad del ejercicio profesional ni existe un sistema institucionalizado de perfeccionamiento profesional mediante una capacitación continua y la familiarización con la evolución internacional de la práctica jurídica. Asimismo, los honorarios de los letrados pueden suponer un verdadero obstáculo para interponer acciones civiles, especialmente en vista de que es frecuente que haya que comparecer muchas veces ante los tribunales debido a los recesos de las audiencias. Ante esa necesidad, en todo el mundo se suele aplicar el pacto de *quota litis* en las causas en que el demandante o demandado no pueden costear los gastos de patrocinio jurídico. No obstante,

la Ley de ejercicio de las profesiones jurídicas de Guyana prohíbe esos arreglos.

- b. **Acceso restringido al asesoramiento y la representación jurídicos.** Este asunto causa gran preocupación debido a las cuestiones fundamentales en las que entiende la administración de justicia, entre ellas, la privación de la vida y la libertad. No existe en el ordenamiento jurídico de Guyana ninguna disposición que garantice la representación jurídica. Si bien hay un sistema básico de asistencia (que prestan el Centro de Asistencia Jurídica de Georgetown y la Asociación de Abogadas de Guyana), los servicios se limitan sobre todo a la defensa y la representación en juicio (quedando excluidos otros servicios jurídicos como el asesoramiento jurídico, un sistema de consultas gratuitas, servicios jurídicos auxiliares, mecanismos comunitarios de solución alternativa de diferencias).
- c. **Opciones limitadas en materia de solución alternativa de diferencias.** El Tribunal Superior de Justicia de Georgetown viene recurriendo a la mediación desde octubre de 2003, con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Los mediadores pueden intervenir en un número limitado de asuntos de derecho civil y sólo a favor de litigantes ante el Tribunal Superior, que en su mayoría ya tienen representantes. No existe un sistema de mediación fuera del Tribunal Superior.
- d. **Conocimiento limitado de los derechos y responsabilidades jurídicos.** Muy poca es la información que se presenta en lenguaje llano, el medio más apropiado de informar al ciudadano de sus derechos y responsabilidades. Un número reducido de organizaciones no gubernamentales (ONG) ha elaborado folletos informativos, pero éstos todavía no están disponibles en todo el país.

E. Estrategia del país para la administración de justicia

- 1.27 Guyana ha determinado que el imperio de la ley tiene prioridad entre las medidas encaminadas a mejorar la gobernanza. En la Estrategia Nacional de Desarrollo de Guyana para 2001-2010 se hace hincapié en diversas iniciativas estratégicas al respecto (reformas del sistema de administración de los tribunales, régimen para que el Poder Judicial asuma la responsabilidad de la administración financiera y presupuestaria, mejora de la cualificación e integridad de los jueces y establecimiento de plazos perentorios para dictar sentencia). Del mismo modo, en el apartado “La buena gobernanza y el sector empresarial” del DELP de Guyana se menciona la reforma judicial como esfera clave de intervención. En consecuencia, se puede decir que en los últimos años se han hecho progresos en la solución de algunos de los problemas fundamentales. Entre estos logros se cuentan los siguientes:

- a. **Atención a la falta de mecanismos de coordinación en toda la administración de justicia:** En fecha reciente, el gobierno realizó un proceso

amplio de consulta como parte de los preparativos para la Estrategia de Reforma de la Administración de Justicia (véase el párrafo 1.3).

- b. **Atención a las demoras en los tribunales:** i) se ha efectuado una auditoría de causas en el Tribunal Superior; ii) se halla avanzado el proceso de actualización de las normas del Tribunal Superior para las causas civiles; iii) en octubre de 2005 se completó con éxito el proyecto bienal piloto de un centro de mediación del Tribunal Superior (ahora se están evaluando propuestas sobre mediación obligatoria y mediación previa al juicio); iv) en 2006 empezó a funcionar un Tribunal de Comercio en la jurisdicción del Tribunal Superior.
- c. **Atención a las deficiencias de las instalaciones y a la ineficiencia de los sistemas:** i) se han hecho mejoras en la biblioteca del Tribunal Superior; ii) se están diseñando sistemas estadísticos y de gestión para recabar y asimilar información; iii) está funcionando un sistema de evaluación del desempeño del personal del Tribunal Superior; iv) se han realizado viajes de estudio para familiarizar a los funcionarios judiciales con las prácticas óptimas.
- d. **Solución del problema del acceso limitado a la justicia:** i) en el proyecto de ley sobre los amerindios (que ya se ha enviado al Parlamento) se reconoce el papel de los Consejos Comunales en la solución de litigios y ii) el Servicio de Libertad Vigilada ha impartido formación a asistentes sociales para que realicen su cometido en la comunidad.
- e. **Respuesta a las preocupaciones públicas respecto de la seguridad:** La Policía i) está elaborando un nuevo plan estratégico que servirá de marco para la reforma y ii) ha puesto en marcha nuevas iniciativas sobre violencia doméstica, delitos de estupefacientes y policía comunitaria.

F. Estrategia del Banco para el país y el sector

- 1.28 Desde 1994, el Banco viene ejecutando proyectos destinados a fortalecer la administración de justicia y el imperio de la ley en toda la región. En el diseño de este programa se incorporan las lecciones aprendidas, incluidas las siguientes: i) es fundamental diseñar proyectos que se adecuen a las circunstancias políticas e institucionales del país, mediante un proceso participativo para forjar un consenso con los interesados directos; ii) la estructura del diseño debería incluir procesos de adaptación y retroinformación durante el período de ejecución del proyecto, a fin de supervisar y planificar actividades conforme a las exigencias y cambios que surjan, y iii) la estructura de ejecución debería incluir medios de coordinación a nivel sectorial para plasmar la participación de los distintos poderes del Estado.
- 1.29 En el caso concreto de Guyana, en el documento de estrategia de país del Banco para 2002-2005 (documento GN-2228-1) se puso de relieve el efecto que ha tenido el reciente aumento de la delincuencia y la violencia en la calidad de la vida de la

población y la confianza de los inversionistas. Por consiguiente, no sólo se previó una operación en la esfera de la seguridad ciudadana y la justicia, sino que se destacó también el fortalecimiento de esos ámbitos como dos de los elementos de un amplio programa de política del sector público que se incluye en la estrategia a modo de complemento de las operaciones programadas. En el marco de ese programa, el Banco ha hecho el seguimiento de los avances de las autoridades conforme a una serie de parámetros fundamentales de reforma. A su vez, se prevé que el progreso respecto de esos parámetros influirá en el monto de financiamiento concesional que el Banco apruebe para Guyana. El Banco también ha contribuido a la creación de un Tribunal de Comercio mediante una operación de cooperación técnica (ATN/SF-8423-GY) aprobada en septiembre de 2003¹⁵.

- 1.30 El Gobierno de Guyana ha acordado ocuparse de la seguridad ciudadana y la justicia por medio de este programa y de otra operación actualmente en preparación (Programa de Seguridad Ciudadana, GY-0071). Esta última es completamente coherente con diversas recomendaciones de la Estrategia de Reforma de la Administración de Justicia que se relacionan con el fortalecimiento de la capacidad de represión de la delincuencia y la mejora de las iniciativas comunitarias de prevención. Estas dos iniciativas podrían reforzar la ejecución de las actividades complementarias que han de llevar a cabo diversas instituciones separadas pero interdependientes de la administración de justicia.

G. Estrategia del programa

- 1.31 Con este programa se respaldarán las medidas iniciales tendientes a la aplicación de la Estrategia de Reforma de la Administración de Justicia. Para ello, el programa se sustentará en los siguientes principios básicos: i) reconocimiento de la correlación entre crecimiento, desarrollo social, estabilidad política e imperio de la ley; ii) focalización en soluciones amplias y aplicables a nivel de toda la administración de justicia, y iii) conceptualización de la rendición de cuentas y de la independencia de la administración de justicia como cuestiones complementarias.
- 1.32 El equipo del proyecto y el Gobierno de Guyana han convenido en que la modalidad del préstamo híbrido (con componentes de reformas de política y de inversiones) resulta particularmente adecuada para esta operación por dos razones: i) la necesidad de sentar las bases, a corto plazo, para la reforma de la administración de justicia, mediante una serie de mejoras del marco normativo (con el impulso fundamental del Poder Ejecutivo), y ii) la necesidad de prestar no sólo asistencia técnica para diseñar estas reformas sustantivas, sino también apoyo técnico y de inversión para la iniciación posterior de un proceso sostenido de creación de capacidad en las instituciones judiciales responsables de su ejecución. El objetivo de este enfoque es forjar un consenso y crear dinamismo respecto del proceso de reforma a largo plazo.

¹⁵ Hasta la fecha, se ha desembolsado el 73% de los fondos de CT aprobados, que ascienden a US\$500.000.

- 1.33 Los trabajos preliminares de consulta y análisis que se realizaron al tiempo de formularse la Estrategia de Reforma de la Administración de Justicia han permitido comprender y forjar un amplio consenso sobre las medidas indispensables para poner en marcha una reforma amplia a mediano plazo. Por esta razón, se ha elegido un enfoque de tramos múltiples para el componente de reformas de política. Asimismo, dada la prioridad de estas reformas y la prominencia que ha adquirido el tema a raíz del proceso de consulta, la modalidad de tramos múltiples permite que el gobierno demuestre su voluntad de ejecutar el programa de reforma institucional y de políticas consignado en la estrategia.

H. Coordinación con otros donantes

- 1.34 Otros organismos de asistencia para el desarrollo reconocen que modernizar la administración de justicia es fundamental para la mejora de la gobernanza y la modernización del sector público de Guyana. Para que todas las iniciativas se complementen debidamente, el Banco ha celebrado consultas individuales con otros donantes y se ha beneficiado de algunos de los trabajos que éstos han realizado. En particular, estos organismos han participado plenamente en el proceso de consultas con los interesados directos para elaborar la Estrategia de Reforma de la Administración de Justicia. A continuación se resumen algunos de los proyectos de asistencia en curso:
- a. La USAID viene colaborando con la administración de justicia para instituir vías alternativas de solución de diferencias, a fin de reducir por ese medio la acumulación de causas civiles, en particular mediante un sistema de mediación en el ámbito del Tribunal Superior. Asimismo, la USAID financió un estudio para evaluar la eficiencia del Tribunal Superior y del Tribunal de Apelaciones, con inclusión de los aspectos de administración de tribunales, el proceso de formulación y aplicación de políticas, la gestión de expedientes y las acumulaciones conexas, los honorarios de justicia y calendarios de pago y la dotación y capacitación del personal. Al diseñar la presente operación se tuvieron en cuenta las conclusiones de ese estudio.
 - b. El Ministerio Británico para el Desarrollo Internacional (DFID) ha financiado un estudio para examinar las normas de administración de los tribunales, cuyas conclusiones se tuvieron en cuenta al diseñar la presente operación.
 - c. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha financiado el examen de dos leyes relacionadas con la infancia (la Ley de derechos del niño y la Ley de formación) y está financiando un programa de lucha contra el VIH/SIDA en el centro correccional juvenil *New Opportunity Corps*.

II. EL PROGRAMA

A. Objetivos y descripción

- 2.1 El objetivo global del programa es realzar el clima de inversiones y el respeto de los derechos de los ciudadanos de Guyana mediante una mejora de la gobernanza del sector público. A fin de alcanzar este objetivo, y de acuerdo con los tres pilares principales de la Estrategia de Reforma de la Administración de Justicia, la operación tiene por objeto ayudar al Gobierno de Guyana a adoptar las medidas iniciales para: i) fortalecer la rendición de cuentas y la eficiencia administrativa en la prestación de servicios en la administración de justicia; ii) fortalecer los vínculos y la coordinación entre las instituciones de la administración de justicia, y iii) mejorar el acceso a la justicia.

B. Estructura del programa

- 2.2 Estos objetivos se han de alcanzar mediante dos componentes relacionados entre sí: i) un componente de reformas de política respaldado con un préstamo de apoyo a reformas de política, por valor de US\$15 millones, y ii) un componente de apoyo técnico y de inversiones, respaldado con un préstamo de inversión, por valor de US\$10 millones. El componente de inversiones ayudará a ejecutar el programa de reformas de política y respaldar las medidas iniciales de creación de capacidad en las instituciones de la administración de justicia.

1. Componente de reformas de política (US\$15 millones)

- 2.3 Este componente brindará apoyo a una serie de reformas sustantivas, entre ellas, medidas legislativas y administrativas necesarias para mejorar la rendición de cuentas, la eficiencia y la accesibilidad de la administración de justicia de Guyana. El apoyo financiero relacionado con este componente de reformas de política se desembolsará en dos tramos. Para cada tramo, se han acordado parámetros específicos con el Gobierno de Guyana a fin de efectuar el seguimiento de la ejecución del programa. La secuencia de las medidas que constituirán este conjunto de parámetros se enuncia en la matriz de condicionalidad (véase el Cuadro V-1 en el Capítulo V). Seguidamente se resume el objetivo de cada tramo.
- 2.4 **Primer tramo (US\$7 millones):** Prestará apoyo a la creación de un nuevo régimen jurídico que modificará las normas fundamentales de funcionamiento de la administración de justicia, así como la ejecución de aspectos institucionales clave de la reforma (como las nuevas normas de gestión autónoma para el Poder Judicial y un régimen para asegurar su mayor autonomía financiera, la adopción de nuevos planes estratégicos de reforma y la creación de instituciones pertinentes en todo el sector, a fin de promover una mayor coordinación y mejorar los procesos de formulación de políticas y planificación para todo el sector).

- 2.5 Las normas, directrices y reglamentos que se han de adoptar incluirán también la elaboración de un código de conducta y ética para jueces y magistrados (junto con disposiciones disciplinarias y sanciones conexas), mecanismos para instaurar demandas y plazos perentorios para la expedición y motivación de sentencias. Las condiciones para el primer tramo conllevan también reformas jurídicas e institucionales sustanciales, como la sanción de varias leyes nuevas, la enmienda de numerosas leyes relacionadas con el procedimiento en lo penal y civil y con normas del proceso judicial y el restablecimiento de la Comisión de Revisión Legislativa. Entre las medidas para promover un mayor acceso a la justicia se cuentan la reforma de la Ley de ejercicio de las profesiones jurídicas y el otorgamiento de facultades a los jueces para remitir causas al Comité de Profesionales del Derecho.
- 2.6 **Segundo tramo (US\$8 millones).** Las medidas del programa contribuirán a la aprobación definitiva de la legislación y de las normas administrativas que se elaboren en el contexto del primer tramo; a otras medidas diseñadas para realzar el cumplimiento de la condicionalidad del primer tramo; a la asunción de las funciones de gestión de recursos humanos por parte de la Comisión de Servicios Judiciales (entidad más estrechamente vinculada al Poder Judicial); a la aprobación de instrumentos jurídicos para establecer un nuevo proceso de aprobación del presupuesto y los procedimientos de gestión del gasto necesarios para asegurar una mayor autonomía financiera de la administración de justicia, y a la aprobación de un régimen jurídico actualizado para la solución alternativa de diferencias.
- 2.7 En las condiciones del segundo tramo figuran, también, la aprobación de un marco de seguimiento y evaluación para toda la administración de justicia (incluidos los organismos que no resultan directamente beneficiados por este programa) y la presentación de los primeros informes semestrales de control para evaluar el progreso de la ejecución de la reforma en relación con los objetivos y las metas. Por último, se incluye una condición con arreglo a la cual la Comisión de Revisión Legislativa habrá completado un plan exhaustivo para actualizar y consolidar el corpus legislativo *Laws of Guyana*.

2. Inversiones y apoyo técnico (US\$10 millones)

- 2.8 Las actividades incluidas en este componente brindarán asistencia a la administración de justicia para que alcance y mantenga los parámetros de reforma previamente identificados, mediante el financiamiento de las mejoras operativas necesarias en las instituciones principales del sector. Con los recursos incluidos en este componente se financiarán partidas de capacitación, servicios de consultoría, compra de programas y equipos de informática y renovación de instalaciones físicas.

a. Subcomponente 1: Fortalecimiento de la capacidad institucional (US\$4,7 millones)

- 2.9 Este subcomponente tiene por objeto mejorar la calidad, eficiencia y eficacia de la prestación de servicios en las instituciones de la administración de justicia de Guyana, mediante el fortalecimiento de la gobernanza y la rendición de cuentas, la creación de capacidad institucional, la optimización de los procesos legales y la modernización de los sistemas administrativos. En particular, mediante este subcomponente se financiarán actividades en las siguientes esferas:
- 2.10 **Fortalecimiento de la Comisión de Servicios Judiciales (JSC).** *Objetivo:* Mejorar la gobernanza, la contratación de personal, la gestión de los recursos humanos y la rendición de cuentas de jueces, magistrados y funcionarios de tribunales. *Tareas específicas:* La Unidad de ejecución del proyecto (UEP) del Poder Judicial contratará servicios de consultoría para que brinden asistencia a la JSC a fin de: i) elaborar las políticas de gobernanza, normas operativas y reglamentos de la JSC; ii) elaborar un nuevo código de conducta y ética para jueces y magistrados, así como normas sobre plazos perentorios para la expedición y motivación de sentencias conforme a la Constitución, y iii) realizar talleres para jueces a fin de que se familiaricen con los nuevos códigos y directrices. El programa financiará también las mejoras de equipamiento e instalaciones que se necesitan para establecer una Secretaría de la JSC. Asimismo, se suministrarán servicios de consultoría, en consulta con la Secretaría del Tribunal Superior, para brindar apoyo a la JSC en la planificación y asunción de funciones de jurisdicción y supervisión (incluidas la contratación y la disciplina) del personal administrativo de tribunales.
- 2.11 **Reducción de causas acumuladas y aumento de las tasas de resolución.** *Objetivo:* Eliminar la acumulación de causas civiles y penales pendientes ante el Tribunal Superior, el Tribunal de Apelación y los tribunales de primera instancia y reducir las demoras en la gestión y resolución de causas. *Tareas específicas:* i) diseño e implantación de nuevos procedimientos de gestión del flujo de expedientes y capacitación en la materia, a cargo de expertos en gestión de causas; ii) mejora del actual programa de resolución de causas civiles acumuladas ante el Tribunal Superior (se suministrarán servicios de consultoría para ayudar a modernizar y mejorar el proceso y ampliarlo a las causas penales, así como a la instrucción preliminar); iii) contratación de servicios de consultoría para expandir la mediación judicial a los tribunales de primera instancia.
- 2.12 **Fortalecimiento de la administración de los tribunales.** *Objetivo:* Fortalecer la administración del Tribunal Supremo en la gestión de causas y de la información relacionada con las causas, los recursos humanos y sus actividades financieras y presupuestarias. *Tareas específicas:* Se contratarán expertos y se adquirirán los equipos necesarios a fin de: i) brindar apoyo a la Secretaría del Tribunal Supremo para elaborar y ejecutar programas y políticas de recursos humanos transparentes y modernos (incluida la reorganización, la elaboración de descripciones de cargos y normas de desempeño y capacitación integral y educación continua para el personal

judicial); ii) diseñar y ejecutar un sistema de información, gestión y comunicación (incluido un sistema de correo electrónico e intranet para el Tribunal Superior y los tribunales de primera instancia); iii) brindar apoyo para mejorar la administración financiera de los tribunales (con particular referencia a la contabilidad y controles, informes financieros, presupuestación), y iv) diseñar e instalar un sistema moderno de información de gestión financiera e impartir la capacitación conexa al personal administrativo de los tribunales.

2.13 Mejora de las cualificaciones y la productividad de jueces y magistrados.

Objetivo: Mejorar la calidad de las sentencias y dictámenes de los jueces y la productividad general de jueces y magistrados. *Tareas específicas:* i) impartir durante todo el período del proyecto capacitación especializada y educación continua a jueces y magistrados, con programas dirigidos tanto a ámbitos especializados del derecho (por ejemplo, el derecho de familia) como a las cualificaciones judiciales (se hará hincapié en la capacitación dentro del país, aunque también se proporcionarán recursos para viajes de estudio, principalmente en el Caribe y América del Norte), y ii) adquirir materiales, recursos y herramientas jurídicos, como textos legales (abastecimiento de las bibliotecas jurídicas) y suscripciones a recursos jurídicos en línea. Se contratará a un consultor para que, en consulta con el Juez Presidente, los jueces y magistrados, evalúe las necesidades, levante un inventario y elabore un plan para la adquisición de los textos, materiales y recursos más indispensables con cargo al presupuesto disponible. El consultor también brindará orientación e impartirá capacitación a los jueces en cuanto al uso de los recursos jurídicos en línea.

2.14 Rehabilitación y mejoras físicas en salas de juzgados y edificios de tribunales.

Objetivo: Velar por que las salas de juzgados y los edificios de tribunales dispongan del equipo básico para facilitar las audiencias y los juicios civiles y penales. *Tareas específicas:* i) realizar una evaluación de necesidades, adquirir mobiliario y accesorios y realizar obras civiles menores en los edificios de tribunales que lo necesiten (en particular varios edificios de tribunales deteriorados en zonas rurales); ii) adquirir equipo para las salas de juzgados (incluidos equipos de grabación y capacitación de redactores de actas literales) y equipos de tecnología de la información y elementos físicos similares para las oficinas de los tribunales de primera instancia; iii) adquirir bienes y equipos y contratar obras menores para edificios de tribunales relacionados con mobiliario y accesorios varios, equipo básico, aislamiento acústico y aire acondicionado.

2.15 Mejora de la justicia penal. *Objetivo:* Mejorar la capacidad funcional y operativa de la Fiscalía y fortalecer la eficiencia de los fiscales.

Tareas específicas: Se contratarán servicios de consultoría a fin de: i) ayudar a diseñar y ejecutar una reorganización funcional y operativa de la Fiscalía; ii) desarrollar y ejecutar un plan para eliminar gradualmente el enjuiciamiento por la Policía de delitos graves y delitos de estupefacientes (a corto plazo) y de todo tipo de causas penales (a largo

- plazo); iii) impartir capacitación a los fiscales, a la Policía¹⁶ (incluida la capacitación para fiscales en disciplinas especializadas como los delitos cibernéticos y el lavado de dinero) y al personal de la Fiscalía. Asimismo, el programa financiará el diseño y la instalación de programas informáticos de información para la gestión; la contratación de obras menores y la adquisición de mobiliario y accesorios para recibir las declaraciones confidenciales de testigos, y la adquisición de bienes y equipos y la contratación obras menores para ampliar las oficinas de la Fiscalía fuera de Georgetown.
- 2.16 **Fortalecimiento institucional del Ministerio de Asuntos Jurídicos.** *Objetivo:* Fortalecer la capacidad funcional y operativa del Ministerio de Asuntos Jurídicos para que cumpla sus mandatos legales y mejore su eficiencia administrativa. *Tareas específicas:* Se contratarán servicios de consultoría a fin de: i) analizar el proceso legislativo, incluido el sistema para asignar legislación a los ministerios competentes y elaborar y ejecutar un plan de reforma; ii) analizar las políticas y procedimientos relacionados con los litigios del Estado y elaborar directrices de políticas y/o legislación, y iii) evaluar la estructura funcional y operativa del Ministerio de Asuntos Jurídicos y ejecutar un plan para fortalecer los departamentos de planificación y políticas del sector jurídico.
- 2.17 **Redacción de leyes de procedimiento civil y penal.** *Objetivo:* Modernizar normas y leyes de procedimiento anticuadas en lo civil y penal y redactar las leyes nuevas necesarias para una tramitación más eficiente, eficaz e imparcial de las causas civiles y penales en los tribunales. *Tareas específicas:* i) Suministrar apoyo de consultoría al proceso de supervisión de la revisión de normas/reglamentos de procedimiento civil y penal del Ministerio de Asuntos Jurídicos en consulta con el Poder Judicial y el Colegio de Abogados; ii) suministrar apoyo de consultoría al Ministerio de Asuntos Jurídicos para la elaboración de leyes (que incluirá las enmiendas a la ley de jurisdicción sumaria [deudas de menor cuantía]; la ley de jurisdicción sumaria [tribunal de primera instancia]; la ley de procedimiento penal; la ley de jurisdicción sumaria [delitos]; la ley penal [delitos]; la ley de pruebas; la ley de arbitraje y la ley de ejercicio de las profesiones jurídicas), y iii) realizar talleres, con la participación de expertos en la redacción de enmiendas legislativas, a fin de que los jueces y magistrados se familiaricen con las leyes nuevas y enmendadas, y proporcionar resúmenes (con directrices) sobre las enmiendas.
- 2.18 **Mejora de otros procedimientos penales y civiles.** *Objetivo:* Modernizar y racionalizar los procedimientos penales y civiles a fin de obtener una mayor simplificación, uniformidad y previsibilidad en aspectos tales como fianzas, sentencias, costas, apelaciones y continuidad de audiencias y juicios. *Tareas específicas:* i) elaborar directrices generales sobre la concesión de libertad bajo

¹⁶ A pesar de que el enjuiciamiento por la Policía se eliminará gradualmente en virtud del programa, la capacitación de la Policía en métodos de enjuiciamiento se considera útil en el período intermedio, en particular porque el conocimiento de estos métodos ayudará a la Fuerza de Policía a mejorar las investigaciones penales.

fianza por parte de jueces y magistrados; ii) reformar los procedimientos de listado y notificaciones a fin de asegurar audiencias y juicios ‘continuos’ (día a día) en el Tribunal Superior y los tribunales de primera instancia; iii) establecer y ejecutar un plan para simplificar los procedimientos de apelación; iv) establecer directrices sobre el dictado de sentencias (entre ellas, órdenes de servicio comunitario) y un marco para facilitar la consulta entre jueces y magistrados sobre el dictado de sentencias; v) elaborar directrices sobre recesos; vi) elaborar directrices e impartir la capacitación conexas sobre imposición de costas; vii) analizar los métodos actuales de aplicación de la ley y elaborar planes de reforma, y viii) en consulta con los principales interesados directos, proceder a la revisión de los honorarios de justicia y las multas (que se incluirán luego en las normas de procedimiento civil del Tribunal Superior).

b. Subcomponente 2: Fortalecimiento de los vínculos entre las instituciones de la administración de justicia (US\$1,2 millón)

- 2.19 El objetivo de este subcomponente será promover interacciones más eficientes entre las instituciones de la justicia mediante intervenciones “en sentido descendente” y “en sentido ascendente”. Las primeras estarán relacionadas con las políticas, la planificación y la asignación de recursos a nivel de toda la administración de justicia, en tanto que las segundas mejorarán la comunicación, la coordinación y la cooperación entre las instituciones a nivel local/operativo.
- 2.20 Como parte de su apoyo a la **dirección normativa, la planificación y la coordinación de toda la administración de justicia** (intervenciones descendentes), el subcomponente financiará actividades para el establecimiento del Comité Directivo de la Reforma de la Administración de Justicia y su Secretaría Técnica. El Comité Directivo brindará orientación de políticas de alto nivel y coordinación para ejecutar la Estrategia de Reforma de la Administración de Justicia. Reunirá a un grupo reducido de responsables clave de la formulación de políticas del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial (que incluirá, como mínimo, los Ministerios de Finanzas, de Asuntos Jurídicos y del Interior, el Procurador General, el Presidente del Poder Judicial y el Juez Presidente) y servirá para continuar la labor del grupo que dirigió la elaboración de la Estrategia de Reforma de la Administración de Justicia. El Comité Directivo constituirá un importante foro de alto nivel para que los diversos organismos del sector coordinen la reforma integral, resuelvan problemas estratégicos a medida que surjan y se cercioren de que se siga la Estrategia general y de que todas las organizaciones hagan lo necesario de acuerdo con los plazos y presupuestos correspondientes. Celebrará reuniones trimestrales para analizar el progreso y tomar todas las decisiones sobre políticas que sean necesarias para guiar la ejecución. La misión del Comité se extenderá a largo plazo y al conjunto de la administración de justicia, más allá del mero alcance de este programa.
- 2.21 La Secretaría Técnica brindará coordinación y apoyo técnico a todas las instituciones de la administración de justicia. En particular, la Secretaría

Técnica i) velará por que las complejas reformas de las distintas instituciones estén vinculadas, secuenciadas, gestionadas y dirigidas eficazmente y cuenten con los recursos necesarios, y en particular por que se traten adecuadamente los aspectos de unificación de la administración de justicia, ii) obtendrá asistencia técnica adicional u otro apoyo según sea necesario para que las instituciones puedan implementar los cambios contemplados en la Estrategia de Reforma de la Administración de Justicia, iii) velará por un control y una evaluación oportunos y apropiados del desempeño estratégico, y se cerciorará de que este desempeño sea comunicado a los interesados directos, iv) prestará servicios de Secretaría al Comité Directivo de la Estrategia de Reforma de la Administración de Justicia, velando por que la Comisión disponga de toda la información necesaria para sustentar sus decisiones y v) coordinará a los organismos de donantes que apoyen a la administración de justicia, lo que incluirá la creación de un grupo de donantes para la administración de justicia.

2.22 Por lo tanto, el objetivo en esta esfera será crear mecanismos institucionales y normativos para facilitar la coordinación y la cooperación interinstitucionales. Entre las *tareas específicas* se incluyen las siguientes: i) brindar apoyo de consultoría a la Secretaría; ii) adquirir mobiliario, accesorios y equipo; iii) elaborar términos de referencia, normas de procedimiento, objetivos y un conjunto integral de parámetros de referencia e indicadores de desempeño; iv) levantar un inventario integral de los procesos (organizativos y funcionales) de cada institución de la administración de justicia a fin de evaluar las economías de costos; v) proporcionar equipo y apoyo de consultoría con la mira de establecer sistemas de información integrada para asimilar y analizar estadísticas e indicadores intersectoriales y presentar los informes respectivos; vi) elaborar un plan funcional y operativo para la Fiscalía con particular referencia a la coordinación con la Policía; vii) elaborar un marco de seguimiento y evaluación; viii) brindar apoyo para aplicar indicadores, objetivos y parámetros de referencia; ix) elaborar planes sistemáticos de seguimiento y evaluación para todo el programa y para instituciones específicas de la administración de justicia, y x) realizar encuestas semestrales de usuarios (Colegio de Abogados, sector privado y sociedad civil).

2.23 En lo referente al apoyo a las **instancias de coordinación a nivel local** (intervenciones ascendentes), el objetivo será alentar la participación continua de la sociedad civil en la elaboración de la estrategia y las políticas de la administración de justicia. Las *tareas específicas* comprenden la contratación de consultores, la adquisición de equipo y la capacitación que se necesiten para: i) establecer Comités de Justicia Penal a nivel local, centrados en cada tribunal de primera instancia (compuestos por representantes de los interesados directos que participen en la tramitación de causas penales, con la mira de mejorar la cooperación, la comunicación y la coordinación interinstitucionales a nivel operativo), y ii) establecer Comités de Justicia Civil formados por los usuarios de los tribunales y otros interesados directos (abogados, sector privado y ONG) y realizar talleres para facilitar las consultas semestrales con el Comité Directivo de la Estrategia de Reforma de la Administración de Justicia.

c. Subcomponente 3: Mejora del acceso a la justicia (US\$2 millones)

- 2.24 El objetivo de este subcomponente es mejorar el acceso a la justicia en Guyana, haciendo que los ciudadanos tomen mayor conciencia de sus derechos y responsabilidades y prestando servicios a los usuarios de los tribunales para facilitar el asesoramiento y la representación jurídicos, así como el acceso a la información y a vías alternativas de solución de diferencias. Para alcanzar esas metas, se financiarán las siguientes actividades con cargo a este subcomponente:
- 2.25 **Ampliación de los servicios de asistencia jurídica.** *Objetivo:* Brindar información, asesoramiento y representación a los ciudadanos, especialmente a los pobres y marginados. *Tareas específicas:* Se financiarán servicios de consultoría, actividades de capacitación y adquisiciones de equipo a fin de: i) suministrar el apoyo de expertos para elaborar el plan de acción de un programa de asistencia jurídica sostenible en todo el país (que incluya oficinas de asesoramiento jurídico de ciudadanos); ii) una vez que el plan de acción haya sido acordado con el Gobierno de Guyana, suministrar asistencia técnica y equipos para prestar apoyo al centro de asistencia jurídica de Georgetown, así como ampliar sus servicios a New Amsterdam y a Essequibo Coast, y iii) brindar capacitación y recursos materiales para la ejecución en tres años del plan nacional de asistencia jurídica.
- 2.26 **Campañas de sensibilización jurídica.** *Objetivo:* Velar por que todos los ciudadanos de Guyana tomen conciencia de sus derechos y responsabilidades jurídicos y de los servicios disponibles para la solución de sus litigios. *Tareas específicas:* Se financiarán servicios de consultoría, actividades de capacitación y adquisición de servicios de medios de comunicación a fin de: i) elaborar un plan de acción y una estrategia nacionales para la sensibilización jurídica y una estrategia de comunicaciones para la administración de justicia; ii) lanzar campañas de medios de comunicación sobre sensibilización jurídica y brindar apoyo a las consultas conexas en colaboración con las ONG, y iii) realizar series de consultas y talleres locales.
- 2.27 **Apoyo a la justicia informal.** *Objetivo:* Brindar vías alternativas como complemento de la administración de justicia, especialmente en zonas rurales y para los pobres y los grupos desaventajados. *Tareas específicas:* i) elaborar un programa de auxiliares jurídicos con el concurso de mediadores sociales voluntarios de los Consejos Comunes, asistentes de bienestar social y jueces de paz y ii) elaborar un plan para la introducción de vías alternativas de solución de diferencias (mediación) y para la ejecución del programa, incluida la capacitación de los mediadores locales y las ONG de la comunidad.
- 2.28 **Revisión y marco legislativos.** *Objetivo:* Mejorar el acceso a la justicia —y a la jurisprudencia— mediante la revisión de leyes específicas y la actualización de los corpus legislativos *Laws of Guyana* y *Guyana Law Reports*. *Tareas específicas:* Se suministrarán apoyo de consultoría y equipos a fin de: i) reformar la ley de ejercicio de las profesiones jurídicas (incluidas las disposiciones para pactos de *quota litis*) y

la ley de solución alternativa de diferencias; ii) apoyar y fortalecer el Comité de Profesionales del Derecho, lo que incluye actividades capacitación; iii) suministrar apoyo de expertos al Ministerio de Asuntos Jurídicos para que actualice el corpus legislativo *Guyana Law Reports*, y servicios de consultoría para brindar asistencia a la Comisión de Revisión Legislativa (que se restablecerá con arreglo al componente de reformas de política del programa).

C. Costo y financiamiento

- 2.29 El costo total del programa se estima en US\$25,2 millones, integrado por un componente de reformas de política de US\$15 millones y un componente de inversiones, de US\$10 millones¹⁷. El Banco financiará el 99% de los costos con recursos del Fondo para Operaciones Especiales (FOE) y el país financiará el 1% para solventar parte de los costos financieros del programa. Se ha escogido una operación híbrida debido a sus ventajas para respaldar la reforma integral del sector. De hecho, es probable que las inversiones en la capacidad administrativa sean más sostenibles si van acompañadas de reformas de fondo y del compromiso del gobierno en cuanto a la gobernanza integral del sector, incluido su marco normativo y jurídico. El siguiente cuadro muestra el presupuesto detallado del programa para los componentes de reformas de política y de inversión, y para los tres subcomponentes del componente de inversión.

¹⁷ Del monto destinado a actividades de inversión, el Ministerio de Asuntos Jurídicos recibirá no menos de US\$4,6 millones y el Poder Judicial recibirá no menos de US\$3,3 millones durante la ejecución del programa. El manual de operaciones del programa contiene un presupuesto muy detallado, donde se distribuyen estos montos entre ambos organismos según las categorías de inversión (el Cuadro II-1 presenta un desglose del presupuesto).

Cuadro II-2. Costos del proyecto (en miles de US\$)

Categorías	BID	Local	Total	%
1. Componente de reformas de política	15.000	0	15.000	59.4
- Primer tramo	7.000			
- Segundo tramo	8.000			
2. Componente de inversiones	9.750	0	9.750	38.7
<i>Subcomponente 1: Fortalecimiento de la capacidad institucional</i>	4.730		4.730	
1.1 Fortalecimiento de la Comisión de Servicios Judiciales	91			
1.2 Reducción de causas acumuladas y demoras	506			
1.3 Fortalecimiento de la administración de los tribunales	1.031			
1.4 Mejora de las cualificaciones y la productividad de jueces y magistrados	939			
1.5 Enmienda de las leyes de procedimiento civil y penal y redacción de nuevas leyes	410			
1.6 Mejoras físicas de salas de juzgados y edificios de tribunales	675			
1.7 Mejora de la justicia penal	867			
1.8 Mejora de los procedimientos penales	45			
1.9 Mejora de los procedimientos civiles	66			
1.10 Justicia administrativa	30			
1.11 Fortalecimiento institucional del Ministerio de Asuntos Jurídicos	70			
<i>Subcomponente 2: Fortalecimiento de los vínculos entre las instituciones de la administración de justicia</i>	<i>1.209</i>		<i>1.209</i>	
2.1 Dirección normativa, planificación y coordinación a nivel de toda la administración de justicia	1.000			
2.2 Asegurar la participación de usuarios y beneficiarios	209			
<i>Subcomponente 3: Mejora del acceso a la justicia</i>	<i>2.077</i>		<i>2.077</i>	
3.1 Ampliación de los servicios de asistencia jurídica.	428			
3.2 Campañas de sensibilización jurídica.	351			
3.3 Justicia informal	298			
3.4 Revisión y marco legislativos	1.000			
<i>Coordinación del Proyecto</i>	<i>1.269</i>		<i>1.269</i>	
- Dotación de personal de la UEP	1.017		1017	
- Otros costos de administración del proyecto (oficinas, equipo y tecnología de la información)	252		252	
<i>Auditoría externa y evaluación</i>	<i>250</i>		<i>250</i>	
<i>Imprevistos</i>	<i>215</i>		<i>215</i>	
3. Costos de financiamiento	250	232	482	1.9
- FIV (1%)	250		250	
- Comisión de crédito		232	232	
Costos totales del programa	25.000	232	25.232	100.0

III. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

A. El prestatario y el organismo ejecutor

- 3.1 El prestatario será la República Cooperativa de Guyana. El organismo ejecutor será el Ministerio de Asuntos Jurídicos. La responsabilidad general por la ejecución del programa incumbirá al Comité Directivo de la Reforma de la Administración de Justicia. Como se ha indicado, también se creará una Secretaría Técnica en el Ministerio de Asuntos Jurídicos a efectos de coordinación y apoyo técnico a todos los organismos de la administración de justicia, incluidos los que se beneficiarán directamente del presente programa (véase el párrafo 2.21). En esa función, la Secretaría Técnica será una instancia de coordinación y una fuente de asesoramiento técnico para todas las actividades del programa. Las actividades que se ejecutarán dentro del Tribunal Superior correrán de cuenta de dicho tribunal, por conducto de la UEP que se describe más adelante.
- 3.2 Se crearán dos UEP, a saber, una dentro del Ministerio de Asuntos Jurídicos y la otra dentro del Poder Judicial, para ejecutar las actividades que el componente de inversiones confiará a sus responsabilidades respectivas¹⁸ (el Ministerio de Asuntos Jurídicos será además responsable de la ejecución directa de las actividades planificadas para la Fiscalía). En el caso del componente de reformas de política, la UEP dentro del Ministerio de Asuntos Jurídicos, bajo la coordinación del Comité Directivo de la Reforma de la Administración de Justicia y su Secretaría Técnica y en cooperación con el Poder Judicial, realizará las actividades necesarias para la ejecución de las reformas y presentará al Banco las pruebas de que se ha cumplido la condicionalidad del préstamo.

B. Ejecución y administración del proyecto

- 3.3 El Comité Directivo de la Reforma de la Administración de Justicia, por medio de su Secretaría Técnica, será responsable de la orientación y supervisión generales del proyecto, así como de la supervisión de los planes operativos y presupuestos anuales. La Secretaría Técnica examinará los informes de progreso sobre la ejecución de los componentes de políticas y de inversiones y servirá de enlace con los demás actores institucionales para facilitar la ejecución ordenada del programa. La Secretaría Técnica será responsable de asegurar la coordinación y la ejecución eficaces de las actividades del programa. En cuanto al componente de reformas de política, la Secretaría Técnica será responsable de: i) supervisar el cumplimiento de la condicionalidad y de los parámetros de referencia de desempeño enunciados en la matriz de políticas y verificación y ii) presentar los informes de progreso del cumplimiento al Ministerio de Finanzas y al Banco.

¹⁸ Esta estructura de ejecución se propone sobre la base de las lecciones aprendidas en operaciones anteriores en Guyana, que muestran que el establecimiento de unidades de ejecución individuales en organismos autónomos es un mecanismo eficaz para asegurar su identificación con el proyecto.

- 3.4 Con relación al componente de inversiones, cada UEP será responsable de:
- i) coordinar la ejecución del programa; ii) examinar y presentar los planes anuales de operaciones¹⁹, los informes semestrales, el informe intermedio y el informe final y los demás informes que el Banco pueda solicitar durante la ejecución del programa; iii) efectuar el seguimiento de la ejecución y suministrar la información respectiva a la Secretaría; iv) realizar las adquisiciones y tramitar los contratos necesarios para la ejecución de los distintos subcomponentes; v) preparar y presentar las solicitudes de desembolso y la justificación del uso de los fondos a satisfacción del Banco, así como los informes semestrales sobre el uso de los fondos rotatorios; vi) preparar los informes anuales de progreso sobre la ejecución para su presentación al Ministerio de Finanzas y al Banco; vii) llevar los registros financieros y contables relacionados con el uso de los recursos del financiamiento, para demostrar en todo momento que los fondos se usan para la finalidad prevista por el préstamo; viii) llevar una documentación adecuada en justificación de los desembolsos recibidos (esta información estará a disposición del personal del Banco y de los auditores externos); y ix) preparar y presentar al Banco los estados financieros del programa, debidamente certificados por auditores externos cualificados.
- 3.5 Cada UEP estará encabezada por un Coordinador, que será un profesional sumamente cualificado que designará el jefe ejecutivo del organismo respectivo (el Tribunal Superior o el Ministerio de Asuntos Jurídicos) en consulta con el Banco. Cada Coordinador tendrá la responsabilidad de actuar como enlace con el Banco y de velar por la coordinación y uniformidad de las actividades de sus proyectos. Las UEP estarán integradas por un oficial de gestión de programas, un oficial de adquisiciones, un oficial de finanzas y contabilidad, un oficial de contabilidad y administración y un secretario/asistente administrativo. Cada Coordinador nombrará al personal de la UEP conforme a los procedimientos del BID. Los recursos del préstamo financiarán los sueldos del personal.
- 3.6 Mediante un convenio entre el Ministerio de Asuntos Jurídicos y el Poder Judicial se reglamentarán las transferencias de fondos del primero al segundo y se determinarán las condiciones y actividades que realizará cada entidad. El convenio contendrá, entre otras condiciones, las siguientes normas: i) todas las transferencias de recursos del Ministerio de Asuntos Jurídicos al Poder Judicial se harán en régimen de recursos no reembolsables; ii) el Poder Judicial realizará las actividades en el ámbito de su competencia en conformidad con las cláusulas y las condiciones establecidas en el contrato de préstamo; y iii) las demás condiciones aplicables a las adquisiciones, la auditoría, el mantenimiento y los informes. Actualmente se están celebrando negociaciones entre los organismos interesados, y la firma del convenio será una condición previa al primer desembolso para el componente de inversiones. Asimismo, para ejecutar las actividades de fortalecimiento de la Fiscalía se suscribirá un convenio interinstitucional entre ésta y el Ministerio de Asuntos

¹⁹ El plan operativo anual para el primer año de ejecución del proyecto se ha acordado con los organismos beneficiarios y se presentará al Banco como parte del informe inicial.

Jurídicos. Con arreglo a ese convenio, la UEP del Ministerio será responsable de los asuntos administrativos y la ejecución concreta de las actividades relacionadas con el fortalecimiento institucional de la Fiscalía, y ésta se hará cargo de la supervisión técnica.

C. Adquisición de bienes y servicios

- 3.7 Las adquisiciones de bienes y servicios se harán en conformidad con las disposiciones contenidas en el documento GN-2349-6 (“Políticas para la adquisición de obras y bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”), de febrero de 2006. Se llamará a licitación internacional cuando los costos de adquisiciones sean superiores a US\$1.000.000 para obras y US\$100.000 para bienes, y a licitación pública nacional cuando los respectivos costos sean inferiores a dichos montos. Cada UEP realizará la selección y contratación de consultores en conformidad con las disposiciones consignadas en el documento GN-2350-6 (“Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”), de febrero de 2006. Para la contratación de servicios de consultoría se aplicará el procedimiento de selección basada en la calidad y el costo, conforme a lo dispuesto en la política del Banco respecto de los consultores. Las adquisiciones de obras y bienes y la selección y contratación de consultores se harán conforme al plan de adquisiciones, que se examinará anualmente.
- 3.8 Los contratos de obras cuyo costo estimativo exceda la cifra de doscientos mil dólares (US\$200.000) y los contratos para bienes de costo estimativo superior a cincuenta mil dólares (US\$50.000) estarán sujetos a la revisión previa del Banco de conformidad con sus procedimientos y políticas. Todos los demás contratos para la contratación de obras y la compra de bienes estarán sujetos a la revisión ex post del Banco.
- 3.9 De igual manera, los contratos para la contratación de servicios de consultoría de costo estimativo superior a cincuenta mil dólares (US\$50.000) estarán sujetos a la revisión previa del Banco de conformidad con sus procedimientos y políticas. Todos los demás contratos para la contratación de servicios de consultoría estarán sujetos a la revisión ex post del Banco.

D. Períodos de ejecución y desembolso

- 3.10 **Procedimiento de desembolso.** Los desembolsos correspondientes al componente de reformas de política están programados para el primer semestre de 2007 y el segundo semestre de 2009. El desembolso de los tramos dependerá de la ejecución satisfactoria de las reformas de política y cambios institucionales convenidos, que se describen en la Matriz de Políticas (véase el Cuadro V-1 en el Capítulo V). Para cada tramo, el Gobierno de Guyana deberá presentar un informe al Banco, que demuestre que se ha dado cumplimiento a las condiciones previas de cada tramo y que se mantiene un marco normativo macroeconómicas apropiado.

- 3.11 El componente de inversiones se desembolsará en un período de 48 meses, a partir de la fecha de vigencia del contrato del préstamo. Para los desembolsos del programa se establecerán dos fondos rotatorios, uno para cada UEP. El total de los recursos asignados a esos fondos rotatorios no excederá 5% del producto del componente de inversión. En el siguiente cuadro se presenta el calendario preliminar de desembolsos.

Cuadro III-1. Proyección de los desembolsos anuales (US\$)

Componente de inversiones

Fuente	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
BID (FOE)	3.187.180	3.245.185	2.864.619	1.703.015
Total	3.187.180	3.245.185	2.864.619	1.703.015
% por año	22%	32,4%	28,6%	17%

- 3.12 ***Auditorías externas.*** La auditoría externa del programa, que se conformará a los procedimientos de contratación del Banco, los términos de referencia y los procedimientos consignados en los documentos AF-200, AF-400 y AF-500, abarcará todo el programa. La auditoría externa abarcará los informes anuales presentados al Banco por cada UEP dentro de los 120 días posteriores al cierre de cada ejercicio económico. El informe final de auditoría se presentará dentro los 120 días posteriores al último desembolso. Los términos de referencia de la auditoría deben ser aprobados por el Banco y los auditores se deben seleccionar de acuerdo con la política del Banco. Los costos de auditoría se financiarán con cargos a los recursos del préstamo.
- 3.13 ***Gestión de finanzas y cuentas.*** El Tribunal Superior y el Ministerio de Asuntos Jurídicos administrarán las finanzas y cuentas del programa y llevarán las cuentas correspondientes a las actividades de las que sean responsables. Con ese fin, cada UEP i) establecerá un sistema eficaz de administración, finanzas y auditoría interna; ii) llevará libros separados para los recursos del préstamo del Banco, de conformidad con el artículo 7.01 de las condiciones generales del contrato de préstamo; iii) compilará información detallada para preparar los estados financieros consolidados, de conformidad con el procedimiento del Banco; iv) conservará la información justificativa del uso de los recursos del programa en un sistema de archivo de fácil acceso, y v) documentará debidamente las solicitudes de desembolsos. En cuanto a los fondos rotatorios, cada UEP será responsable de i) preparar los estados semestrales de los fondos rotatorios; y ii) solicitar las reposiciones de los fondos rotatorios.
- 3.14 ***Condiciones del préstamo.*** Para esta operación, la condicionalidad forma parte de un ciclo que abarca la reforma de políticas (por conducto del componente de políticas) y el fortalecimiento de la capacidad (por conducto del componente de inversiones). Para el *componente de reformas de política*, los desembolsos se harán en dos tramos de US\$5 millones y US\$10 millones, respectivamente, conforme a las condiciones descritas en la Matriz de Políticas (véase el Cuadro V-1 en el

Capítulo V). Para el *componente de inversiones*, las condiciones para el primer desembolso son las siguientes: i) prueba de que se han creado y dotado en personal las UEP dentro del Tribunal Superior y el Ministerio de Asuntos Jurídicos; ii) prueba de que se han creado, dotado en personal y puesto en funcionamiento el Comité Directivo de la Estrategia de Reforma de la Administración de Justicia y su Secretaría Técnica; iii) prueba de que se ha adoptado el manual de operaciones del programa²⁰; y iv) prueba de que se han suscrito los convenios entre el Ministerio de Asuntos Jurídicos y el Poder Judicial y entre el Ministerio de Asuntos Jurídicos y la Fiscalía.

- 3.15 Una vez que entre en vigencia el contrato de préstamo y que el prestatario haya dado cumplimiento a las condiciones generales previas al primer desembolso, se recomienda que el Directorio Ejecutivo autorice un desembolso especial al prestatario de hasta US\$300.000 con cargo a los recursos del Banco, para instaurar la Secretaría Técnica y las unidades de ejecución del proyecto y ayudar al organismo ejecutor a cumplir con las condiciones especiales previas al primer desembolso.
- 3.16 Antes del llamado a licitación para ejecutar las mejoras físicas de los juzgados previstas en el Subcomponente 1 del programa, el prestatario presentará a satisfacción del Banco prueba del cumplimiento de las siguientes condiciones: i) Se han formulado y aprobado políticas de gobernanza y las normas operativas de la Secretaría de la Comisión de Servicios Judiciales; ii) la Secretaría del Tribunal Superior ha adoptado un manual interno de gestión financiera (con inclusión de responsabilidades y procedimientos en materia de formulación y ejecución del presupuesto, mantenimiento de un control interno satisfactorio y presentación de informes contables financieros) a fin de velar por la debida gestión de los recursos financieros dentro del Poder Judicial, en consonancia con las disposiciones de la Ley de gestión y responsabilidad fiscales de 2003 y con los Reglamentos y las Circulares de Finanzas expedidos en virtud de esa Ley, y iii) se ha creado una Unidad de Auditoría Interna en la Secretaría del Tribunal Superior para efectuar auditorías internas a nivel de todo el Poder Judicial, incluso en todas las oficinas de tribunales en que se administren recursos financieros.

²⁰ Las instituciones participantes en el programa están negociando el texto del manual de operaciones. Se espera que éste quedará terminado después de que se apruebe la operación.

E. Seguimiento y evaluación

- 3.17 El Banco hará el seguimiento del progreso general del programa. El seguimiento y el control de la operación se basarán en los indicadores identificados en el Marco Lógico (véase el Anexo I) ²¹.
- 3.18 La Secretaría, que se establecerá desde el comienzo de la ejecución del programa (véase el párrafo 3.14), será responsable de la coordinación de todos los procesos de seguimiento y evaluación. Esta actividad abarcará lo siguiente: i) velar por que las UEP mantengan una información actualizada y disponible sobre su desempeño y el logro de los objetivos del programa, consignados en el marco lógico (y brindarles apoyo para asegurarse de que tengan sistemas adecuados para la recopilación de datos con objeto de hacer el seguimiento de sus avances en el logro de los indicadores de desempeño pertinentes); ii) brindar apoyo técnico e impartir capacitación al personal de las UEP en las esferas del seguimiento de proyectos y la presentación de informes sobre el desempeño basados en la metodología del marco lógico; iii) preparar y presentar al Comité Directivo de la Reforma de la Administración de Justicia y al Banco informes periódicos sobre el estado del programa, incluidos los estudios especiales que se soliciten. El manual de operaciones del programa incluirá mecanismos para velar por que Unidades de Ejecución de Proyectos transmitan a la Secretaría Técnica toda la información sobre el desempeño.
- 3.19 **Informes del programa.** Cada UEP presentará informes semestrales del programa que combinen los elementos financieros y técnicos del programa y presenten información sobre los siguientes aspectos: i) progreso en la consecución de los objetivos del programa; ii) logro de los indicadores de desempeño acordados; iii) progreso físico logrado en los proyectos de inversión, y iv) problemas que se hayan planteado durante la ejecución y las soluciones que se hayan adoptado. Cuando, a luz de los informes presentados, el Banco estime que el estado de ejecución del programa es insatisfactorio, las UEP tendrán 30 días para presentar una propuesta de medidas correctivas de la situación.
- 3.20 **Evaluación intermedia y evaluación final.** Cuando se haya comprometido el 50% de los recursos del componente de inversiones, se contratarán servicios de consultoría independientes para suministrar información suficiente para realizar una evaluación intermedia que el Banco y el Gobierno de Guyana realizarán conjuntamente. De manera análoga, al finalizar el período de desembolso del

²¹ Tanto el componente de reforma de políticas como el componente de inversión están dirigidos a la misma finalidad y la misma meta, según se señala en el marco lógico, que incluye indicadores de productos y efectos resultantes de ambos componentes y, por lo tanto, reemplaza la matriz de resultados que suele acompañar a los programas individuales de reformas de políticas. La información contenida en el marco lógico está complementada con una matriz separada (véase el resumen del programa en el cuadro de enlaces electrónicos que aparece en la página ii) que vincula los problemas identificados y los objetivos del programa con condiciones de política y actividades de inversión específicas, con el efecto previsto de las mismas.

programa, se contratarán consultores para realizar la evaluación final que se presentará al Banco para su discusión con el gobierno. Los objetivos principales de estas evaluaciones serán los siguientes: i) analizar los resultados de los diversos componentes; ii) verificar el cumplimiento de los indicadores de desempeño del programa, descritos en el Marco Lógico (véase el Anexo I), y iii) verificar el cumplimiento del manual de operaciones del programa.

- 3.21 **Otras evaluaciones.** El prestatario y los organismos ejecutores recopilarán, almacenarán y retendrán la información, los indicadores y los parámetros, incluidos los planes anuales, las evaluaciones intermedia y final, a fin de ayudar al Banco a preparar el informe de terminación del proyecto (ITP).

IV. VIABILIDAD Y RIESGOS

A. Viabilidad institucional

- 4.1 La viabilidad institucional es un desafío importante para todos los proyectos del Banco en Guyana. Como consecuencia de una de las tasas de emigración más elevadas del hemisferio, la base de recursos humanos y la capacidad institucional del país han sufrido un deterioro. Este déficit de cualificaciones afecta a los sectores público y privado, pero su mayor repercusión corresponde a los grupos de funcionarios públicos mejor preparados, que reciben bajas remuneraciones. Ello se refleja en una falta de recursos humanos adecuados, una frecuente rotación de personal y unos deficientes sistemas de gestión en todo sector público. El aumento de los índices de delincuencia ha acelerado esa tendencia.
- 4.2 En el caso de la operación propuesta, un problema adicional es que las instituciones beneficiarias han demostrado exigua experiencia en la ejecución de programas. La Oficina del Juez Presidente (*Office of the Chief Justice*) es el organismo ejecutor de la operación de cooperación técnica financiada con recursos del Banco para el “Establecimiento de un Tribunal de Comercio y vías alternativas de solución de diferencias”. Esta operación avanza de manera satisfactoria, pues la creación del Tribunal de Comercio es inminente; sin embargo, ha progresado con lentitud y a todas luces se precisa un mayor fortalecimiento de capacidades.
- 4.3 Dadas las estructuras administrativas relativamente deficientes de los organismos ejecutores y su falta de experiencia en la gestión de programas de apoyo técnico y recursos de préstamos, se han adoptado dos enfoques principales en el diseño de esta operación. Primero, se hace gran hincapié en el refuerzo de la capacidad en las instituciones responsables de la ejecución del programa de reforma. La capacitación intensiva y la mejora del entorno de trabajo debieran ayudar a elevar la calidad de los recursos humanos en estas instituciones; por otra parte, una mayor influencia o autonomía en la gestión de los recursos humanos también debería ayudar a mitigar los problemas de rotación de personal. Segundo, los mecanismos de ejecución incorporados en el programa brindarán un sólido apoyo a los organismos intervinientes. Estos mecanismos comprenden un órgano de coordinación robusto en la Secretaría Técnica y unas UEP sólidas e independientes, que darán apoyo a cada organismo durante la ejecución, además de una modalidad operativa flexible con seguimiento permanente basado en planes anuales de operaciones.
- 4.4 Por último, otro factor que debiera ayudar a garantizar la viabilidad institucional es el amplio sentido de propiedad del programa que se observa. La Estrategia de Reforma de la Administración de Justicia respondió a un anhelo de larga data de introducir mejoras en la administración de justicia, y se preparó mediante un amplio proceso de consulta que abarcó a todas las instituciones de la administración de justicia, así como a otros interesados directos, incluidos la sociedad civil y el sector privado. Además de las amplias entrevistas, se organizaron siete talleres y dos

seminarios (con la asistencia de aproximadamente 200 interesados directos) en todo el país, con miras a que la elaboración de la Estrategia fuera lo más participativa posible. El resultado ha sido un elevado nivel de consenso intersectorial.

B. Viabilidad socioeconómica

- 4.5 Aunque difícil cuantificar, se espera que los beneficios socioeconómicos de este proyecto sean sumamente significativos. El efecto más directo será el aumento de la productividad en la administración de justicia. Los organismos interesados no se han beneficiado, hasta ahora, de un apoyo externo integral en materia financiera y técnica, y existen grandes posibilidades de mejorar la prestación de servicios. Además, en el diseño del programa se ha asignado prioridad a las actividades en función de la percepción de los interesados directos en cuanto a los costos en relación con los efectos. En consecuencia, se hace particular hincapié en aquellas actividades sin costo en las que las políticas, decisiones administrativas o procesales y otras medidas pueden propiciar reformas sin necesidad de realizar nuevos gastos, y en las economías de costos mediante la eliminación de procesos ineficientes e innecesarios.
- 4.6 Dentro del Poder Judicial, los aumentos de eficiencia se derivarían principalmente de la modernización y simplificación de los procedimientos judiciales; el fortalecimiento de los sistemas de gestión de causas; la mejor administración de los tribunales, acompañada de una mayor influencia del Poder Judicial sobre la gestión del personal administrativo; y el aumento de la productividad de jueces y magistrados merced a una capacitación especializada, una normativa ética y disciplinaria más estricta y una mayor aportación de recursos jurídicos. La gestión más eficiente de los juicios se verá facilitada, también, por la ampliación de servicios más económicos de mediación y vías alternativas de solución de diferencias. Se espera que en otros organismos del sector el perfeccionamiento de las directrices sobre sentencias y fianzas alivie la presión sobre el régimen penitenciario; por otra parte, la eliminación gradual del enjuiciamiento policial liberará recursos considerables dentro de esa organización, que compensarán con creces la necesaria ampliación de las operaciones de la Fiscalía. Por último, a nivel de todo el sector, se hará hincapié en las economías de costos mediante la racionalización de procedimientos y la mancomunación de recursos, junto con la introducción general de una presupuestación integrada y orientada hacia los resultados, con la mira de que todos los recursos destinados al sector se asignen racionalmente entre todas sus instituciones.
- 4.7 Habida cuenta de la exigua cuantía de recursos presupuestarios que ahora se asignan a la administración de justicia, se estima que estos aumentos de productividad no se traducirán en economías de costos directas para el Estado, aunque sí en una mejor prestación de servicios. Se ha usado una evaluación de costo-beneficio simplificada para calcular el valor económico potencial de esos

aumentos directos de eficiencia²². Teniendo en cuenta diversas hipótesis razonables con respecto a las consecuencias de costos recurrentes de la operación, se estima que para que el Estado pueda recuperar el componente de inversiones de la operación, los aumentos de productividad de todo el sector tendrían que llegar a algo menos de 7% por año. Esa tasa parece muy probable debido al actual potencial en cuanto a los aumentos de eficiencia en el sector y a la escala significativa de las inversiones que se están haciendo.

Cuadro IV-1 Análisis del punto de equilibrio financiero
(Costos directos y beneficios, en US\$)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A. Costos totales	1.800.000	1.685.000	1.945.000	837.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
A.1 Inversiones del programa	2.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000											
A.2 Pago de intereses		20.000	50.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
A.3 Costos operativos				182.000	187.460	193.084	198.876	204.843	210.988	217.318	223.837	230.552	237.469	244.593	182.000
B. Total beneficios (Supone ganancias de productividad por los empleados del sector de justicia del 7% anual)			1.568.350	1.615.401	1.663.863	1.713.778	1.765.192	1.818.147	1.872.692	1.928.873	1.986.739	2.046.341	2.107.731	2.170.963	2.236.092
C. Beneficios netos (B-A)	-2.000.000	-3.020.000	-1.481.650	-464.600	1.381.863	1.426.318	1.472.108	1.519.271	1.567.849	1.617.885	1.669.421	1.622.504	1.677.179	1.733.494	1.791.499
D. Indicadores de viabilidad															
D.1 Valor neto actualizado ¹	292.174														

¹ Tasa de actualización: 12%

4.8 Sin embargo, los aumentos de eficiencia directos en el sector representarán sólo una pequeña parte de los beneficios. En cambio, se estima que la repercusión más significativa se derivará de las externalidades positivas para los inversionistas del sector privado y la sociedad guyanesa en su totalidad. Aunque se estima que en el marco del programa se aumentarán los honorarios judiciales (que registran ahora un nivel insignificante), la mejora de los servicios compensará con creces ese aumento, pues reducirá los costos indirectos para las compañías y los particulares que ya acuden a la administración de justicia y alentará a otros a recurrir a la justicia. En consecuencia, el programa ayudará a mejorar tanto la justicia social como la asignación de recursos en el sector privado.

4.9 Con respecto a este último aspecto, casi la mitad de las compañías con experiencia reciente con la administración de justicia han dicho que supone un obstáculo importante o muy serio para su actividad comercial (véase el párrafo 1.1). La reducción del número de causas acumuladas y de las demoras proyectada por el programa, junto con una mayor previsibilidad y valor de las decisiones de los tribunales, debiera ayudar a revertir la reciente tendencia descendente de la inversión privada, con el consiguiente efecto positivo sobre el crecimiento económico. La mejora de la capacidad del ministerio público también contribuirá probablemente a prevenir la delincuencia, un fenómeno que las empresas consideran asimismo como un obstáculo de envergadura para su actividad y que tiene una repercusión considerable sobre la calidad de la vida en Guyana. Los datos

²² El período de inversión (o costo) previsto del proyecto será de cuatro años, en tanto que los beneficios se han proyectado durante un período de 15 años. Se supone que los beneficios se observarán a partir del tercer año de ejecución del proyecto.

anecdóticos indican que las elevadas tasas de delincuencia acentúan el problema de la emigración de trabajadores cualificados, que se ha convertido en un grave obstáculo para el desarrollo del sector privado y el crecimiento económico en general.

C. Viabilidad financiera

- 4.10 El Banco proporcionará financiamiento de 100% para las actividades de inversión del programa, lo que eliminará la necesidad del financiamiento de contrapartida. Las consecuencias para las finanzas del Estado se centran en los costos recurrentes que se necesitan para sostener las inversiones a largo plazo y los costos del servicio de la deuda relacionados con el préstamo del Banco. Los costos recurrentes netos de toda la administración de justicia se calculan en un promedio anual ligeramente superior a US\$200.000 en los 10 años siguientes a la terminación del programa. Se espera que los costos recurrentes del Poder Judicial se solventen sobradamente con el aumento de los honorarios de justicia, lo que permitirá ampliar el presupuesto de la justicia sin que ello implique consecuencias para las finanzas del gobierno central. Los demás costos recurrentes ascienden ahora a sólo 0,025% del gasto público corriente no financiero. Con respecto a los gastos de servicio de la deuda, esta operación ya se ha incorporado en el último análisis de sostenibilidad de la deuda realizado en el marco del programa del Servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza (SCLP) del FMI. Aunque el país continúa teniendo un riesgo moderado de sobreendeudamiento, se ha comprobado que el programa es compatible con los límites de endeudamiento establecidos en el programa del SCLP.

D. Impacto ambiental

- 4.11 Se prevé que el programa no tendrá ningún impacto ambiental directo, pues todas las iniciativas se limitan a la reforma de políticas en el ámbito de la administración de justicia. Por cuanto incluirá actividades dirigidas a facilitar el acceso a la justicia por parte de los estratos de población más pobres, el programa tendrá una repercusión social directa y positiva. Esta operación fue examinada y aprobada por el Comité de Medio Ambiente e Impacto Social (CESI) el 10 de marzo de 2006, sin observaciones.

E. Beneficios y beneficiarios

- 4.12 El propósito de este programa es mejorar la administración de justicia mediante servicios más eficientes, eficaces y equitativos. Ello se logrará de tres maneras principales: **primero**, mediante el perfeccionamiento de la eficiencia de las instituciones de la administración de justicia, incluidas la aceleración de los juicios y la reducción de las causas acumuladas y de las demoras; **segundo**, mediante el refuerzo de los vínculos entre instituciones de la administración de justicia, ayudando a eliminar procesos innecesarios y a introducir procesos cooperativos y coordinados de políticas, planificación y asignación de recursos; y **tercero**,

mediante un mejor acceso a la administración de justicia para los grupos desaventajados y una mayor disponibilidad de información pública sobre derechos y procedimientos. Los beneficiarios directos de estas mejoras serán los usuarios de la administración de justicia, que sacarán provecho de una resolución más rápida y eficaz de sus casos. Se estima que los contribuyentes también se beneficiarán, a mediano y largo plazo, gracias a una prestación más económica de los servicios de la justicia.

- 4.13 La meta fundamental del programa es realzar el clima de inversiones y el imperio de la ley en Guyana mediante una mejora de la gobernanza del sector público. En la medida en que el programa pueda alcanzar esa meta, los beneficiarios últimos serán todos los ciudadanos guyaneses, que se beneficiarán de una reducción de los índices de delincuencia y de una mejora de las perspectivas económicas que se deriven de un aumento de las tasas de inversión.

F. Riesgos

- 4.14 En el marco de la preparación del proyecto se ha realizado un análisis de riesgos (archivos técnicos). Este análisis se basa en la información obtenida durante el amplio proceso de consulta que se llevó a cabo para la Estrategia de Reforma de la Administración de Justicia. Los riesgos asociados con este programa están incluidos también en el marco lógico del programa. Además de las deficiencias institucionales examinadas en la sección A, los riesgos más significativos se relacionan con i) las próximas elecciones nacionales, ii) la voluntad política actual y iii) el financiamiento sostenible.
- 4.15 En 2006 se celebrarán elecciones en Guyana. Ese proceso podría distraer la atención de los esfuerzos destinados a la aplicación del programa en momentos en que comienza su ejecución, con una consiguiente pérdida de dinamismo. Para reducir al mínimo ese riesgo, en la campaña de sensibilización pública se podría incluir el relanzamiento de la estrategia para recuperar el apoyo y el compromiso de las principales instituciones interesadas. Asimismo, de haber un cambio de gobierno o si el partido oficialista pierde su mayoría parlamentaria, se correría el riesgo de que disminuya el apoyo a las diversas leyes previstas en el programa. Este riesgo está mitigado por el proceso participativo que se usó para diseñar el programa. En consecuencia, durante ese proceso consultivo se puso de manifiesto un elevado nivel de consenso entre instituciones y partidos en relación con dicha legislación (y, en verdad, respecto de todos los elementos del programa).
- 4.16 Los complejos problemas de la reforma de la administración de justicia requieren medidas coordinadas y sostenidas en diversas esferas, algunas de ellas relacionadas con el entorno político. El programa abarcará diversas instituciones en dos poderes públicos (los poderes ejecutivo y judicial), lo que plantea la posibilidad de una ejecución lenta o incluso de resistencia a la mejora de los vínculos interinstitucionales o, en verdad, al funcionamiento más autónomo de algunas instituciones (por ejemplo, el nivel de autonomía financiera del Poder Judicial que

el programa propicia ha planteado dificultades, si bien en última instancia éstas se han resuelto de manera satisfactoria). Este riesgo está mitigado por la elevada visibilidad que tendrán las iniciativas de reforma del sector debido a las campañas de comunicación y los consiguientes incentivos políticos a favor de la cooperación, así como por una dirección eficaz mediante el Comité Directivo de la Reforma de la Administración de Justicia.

- 4.17 Otro riesgo sería el de la insuficiencia de financiamiento para las instituciones de la administración de justicia, que daría lugar a que no se pudieran sostener las mejoras de capacidad iniciadas con el programa. En el caso del Poder Judicial, este riesgo debiera mitigarse gracias a los aumentos previstos en los honorarios de justicia, que constituirán un argumento persuasivo a favor de aumentar las asignaciones presupuestarias para el Poder Judicial. Además, se prevé que después del fortalecimiento de los vínculos entre las diversas instituciones de la justicia, se podrían elaborar propuestas de presupuestos para el sector, que reforzarían los argumentos a favor de un financiamiento suficiente.

V. MATRIZ DE POLÍTICAS

- 5.1 En el siguiente cuadro se detallan las condiciones para el desembolso de cada tramo del componente de reformas de política.

Cuadro V-1. Matriz de condicionalidad de políticas

Objetivos	Medidas previas adoptadas por el prestatario	Primer tramo	Segundo tramo
Marco macroeconómico			
Estabilidad macroeconómica		El marco macroeconómico del prestatario está en consonancia con los objetivos del programa.	El marco macroeconómico del prestatario está en consonancia con los objetivos del programa.
A. Prestación de servicios			
Mejorar la capacidad de las instituciones de la administración de justicia para prestar servicios en forma eficiente y eficaz	<ul style="list-style-type: none"> La auditoría de causas en el Tribunal Superior de Justicia lleva a reducir las causas acumuladas en más de 50 por ciento. Está en marcha el proceso de actualización de los reglamentos del Tribunal Superior para los juicios civiles. El proyecto bienal piloto del Centro de Mediación del Tribunal Superior se terminó satisfactoriamente (octubre de 2005). Avanzó la creación de un Tribunal de Comercio en el Tribunal Superior (que se espera comenzará a funcionar en 2006). Se han introducido mejoras en la biblioteca del Tribunal Superior. Se aplica un sistema de evaluación del personal en el Tribunal Superior. Altos funcionarios judiciales realizan viajes de estudios. 	<p>A.1.1 Se redacta y el Gabinete aprueba el Reglamento de la Comisión de Servicios Judiciales (JSC).</p> <p>(El Reglamento de la JSC incluye, entre otras cosas, los siguientes aspectos: Un código de conducta y ética para jueces y magistrados, un régimen de sanciones, mecanismos para interponer recursos, directrices sobre plazos perentorios, políticas relativas al establecimiento y las operaciones de una Secretaría de la JSC).</p>	<p>A.1.2 El Parlamento aprueba el Reglamento de la JSC.</p> <p>A.1.3 Prueba de que los Presupuestos aprobados asignan recursos que garanticen el funcionamiento de la Secretaría de la JSC desde el momento de su creación.</p> <p>A.1.4 La JSC asume la gestión de los recursos humanos (incluidas contratación y disciplina) de los tribunales en sustitución de la Comisión de Administración Pública, a reserva de las consideraciones de viabilidad constitucional según se determine en un análisis jurídico previo.</p>

Cuadro V-1. Matriz de condicionalidad de políticas

Objetivos	Medidas previas adoptadas por el prestatario	Primer tramo	Segundo tramo
		<p>A.2.1 La Oficina del Procurador General, previa consulta con el Poder Judicial y el Colegio de Abogados, presenta al Gabinete los siguientes proyectos de enmiendas: Ley de jurisdicción sumaria (deudas de menor cuantía); Ley de jurisdicción sumaria (tribunal de primera instancia); Ley de procedimiento penal; Ley de jurisdicción sumaria (delitos); Ley penal (delitos); Reglamento del Tribunal Superior; y Ley de desacato a la justicia.</p> <p>A.2.2 Se redactan los proyectos de ley sobre delincuentes juveniles y escuelas de formación.</p> <p>A.3.1 El Ministerio de Finanzas aprueba un marco que esboza los mecanismos que se instituirán para reforzar la rendición de cuentas, la eficiencia y la autonomía con relación a la aprobación del presupuesto del Poder Judicial y su gestión del gasto.</p> <p>A.3.2 El Ministerio de Asuntos Jurídicos emprende un estudio con el fin de determinar los instrumentos jurídicos necesarios para mejorar la gestión financiera del Poder Judicial, de conformidad con el artículo 122A de la Constitución.</p>	<p>A.2.3 El Parlamento aprueba y sanciona las enmiendas a la Ley de jurisdicción sumaria (deudas de menor cuantía); la Ley de jurisdicción sumaria (tribunal de primera instancia); la Ley de procedimiento penal; la Ley de jurisdicción sumaria (delitos); y la Ley penal (delitos). El Parlamento aprueba el Reglamento del Tribunal Superior y sanciona la ley de desacato a la justicia.</p> <p>A.2.4 Se sancionan la Ley sobre delincuentes juveniles y la Ley de escuelas de formación.</p> <p>A.3.3 El marco se está aplicando.</p> <p>A.3.4 El Parlamento aprueba los instrumentos jurídicos que establecen el nuevo proceso de aprobación del presupuesto y los procedimientos de gestión del gasto.</p>

Cuadro V-1. Matriz de condicionalidad de políticas

Objetivos	Medidas previas adoptadas por el prestatario	Primer tramo	Segundo tramo
B. Vínculos entre instituciones			
Fortalecer los vínculos entre las instituciones de la administración de justicia	<ul style="list-style-type: none"> • Se inició el proceso de consulta para redactar la Estrategia de Reforma de la Administración de Justicia, presidido por el gobierno. • La Policía está elaborando un nuevo plan estratégico. • Nueva iniciativa de la Policía sobre violencia doméstica, delitos relacionados con estupefacientes y policía comunitaria. 	<p>B.1.1 Se crea por decreto ejecutivo el Comité Directivo de la Reforma de la Administración de Justicia (órgano máximo de formulación de políticas) y sus términos de referencia (incluidos su Reglamento, objetivos y parámetros de referencia) son acordados y aprobados por sus miembros.</p> <p>B.1.2 El Gabinete aprueba y da a publicidad la estrategia y el plan de reforma de la administración de justicia (2006-2010).</p> <p>B.1.3 Se crea, se dota de personal y se pone en funcionamiento la Secretaría Técnica del Comité Directivo de la Estrategia de Reforma de la Administración de Justicia.</p>	<p>B.1.4 El Comité Directivo ha elaborado y aprobado el marco de seguimiento y evaluación para Estrategia de Reforma de la Administración de Justicia. Desde el momento en que se crea la Secretaría, se han presentado sistemáticamente los informes semestrales de seguimiento para evaluar el progreso de los planes de ejecución de reformas en comparación con las metas y objetivos.</p> <p>B.2.1 El Gabinete ha aprobado el plan estratégico de ejecución de la reforma de los establecimientos penitenciarios y, al cabo de un extenso proceso de consulta, el plan estratégico de ejecución de la reforma de la policía. Desde la aprobación de los planes se han publicado anualmente informes de seguimiento para evaluar la observancia de los planes de ejecución de dichas reformas de acuerdo con las metas y objetivos establecidos.</p>

Cuadro V-1. Matriz de condicionalidad de políticas

Objetivos	Medidas previas adoptadas por el prestatario	Primer tramo	Segundo tramo
		<p>B.3.1 El Gabinete ha aprobado el plan para fortalecer la relación funcional y operativa entre la Fiscalía y la Policía, incluido el plan por etapas para que la Fiscalía asuma la responsabilidad por el enjuiciamiento de delitos graves y delitos relacionados con estupefacientes.</p> <p>B.3.2 El Ministerio de Asuntos Jurídicos redacta el proyecto de enmienda a la Ley de pruebas.</p>	<p>B.3.3 Cumplimiento del plan de acción para la Fiscalía.</p> <p>B.3.4 Se sancionan las enmiendas a la Ley de pruebas.</p>
C. Acceso a la justicia			
Mejorar el acceso a la justicia para todos	<ul style="list-style-type: none"> Se presenta al Parlamento el proyecto de Ley sobre los amerindios (actualmente en el Parlamento) que reconoce la función de los Consejos Comunes en la resolución de conflictos. El Servicio de Libertad Vigilada imparte formación a asistentes sociales. 	<p>C.1.1 Tras las consultas con los interesados directos (es decir, el Colegio de Abogados y el Poder Judicial), el Ministerio de Asuntos Jurídicos redacta un nuevo proyecto de Ley de ejercicio de las profesiones jurídicas (que incluye, entre otras cosas, los siguientes aspectos: requisitos de idoneidad, directrices disciplinarias, régimen del pacto de <i>quota litis</i> y autorización para que los jueces puedan remitir causas al Comité de Profesionales del Derecho).</p> <p>C.1.2 Se restablece la Comisión de Revisión Legislativa.</p>	<p>C.1.3 Se sanciona la Ley de ejercicio de las profesiones jurídicas.</p> <p>C.1.4 En sustitución de la Ley de arbitraje de 1931, se sanciona la Ley de vías alternativas de solución de diferencias basada en el modelo de la CNUDMI.</p> <p>C.1.5 A partir de un plan aprobado que ha completado la Comisión de Revisión Legislativa, se ha actualizado y publicado hasta el año 2006, inclusive, el corpus legislativo <i>Laws of Guyana</i>.</p>

MARCO LÓGICO
MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (GY-L1009)

Resumen descriptivo	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
Meta			
1. Realzar el clima de inversiones y el respeto de los derechos de los ciudadanos mediante una mejora de la gobernanza del sector público.	<p>Cinco años después de la terminación del programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menos del 35% de los usuarios de los tribunales estiman que el ordenamiento jurídico es un obstáculo importante o muy serio para su actividad comercial. Punto de comparación: En 2005, el 47% de los usuarios de los tribunales estimaban que el ordenamiento jurídico era un obstáculo importante o muy serio para su actividad (<i>Banco Mundial, Evaluación del clima de negocios.</i>) Menos del 20% de las empresas guyanesas estiman que la delincuencia, el robo y el desorden constituyen un obstáculo importante o muy serio para su actividad comercial. Punto de comparación: En 2005, el 30% de las empresas guyanesas estimaban que la delincuencia, el robo y el desorden eran un obstáculo importante o muy serio para su actividad (<i>Banco Mundial, Evaluación del clima de negocios.</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Banco Mundial, Evaluación del clima de negocios. 	<ul style="list-style-type: none"> Se mantiene la voluntad política de llevar adelante las reformas introducidas por el programa. Se mantiene la estabilidad macroeconómica.
Propósito			
1. Mejorar la administración de justicia mediante servicios más eficientes, eficaces y equitativos.	<p>Dos años después de la terminación del programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Las tasas de resolución (causas juzgadas / causas iniciadas en un año) pasan de 80%. Punto de comparación: i) En los tribunales de primera instancia, en 1998, la tasa de resolución era de 33% en causas civiles y 50% en causas penales. ii) En 1998, el Tribunal de Apelación celebró audiencias en el 31% de las causas civiles interpuestas y el 69% de las causas penales (<i>Surveys of Users and Providers of Justice Sector Service, Caribbean Justice Sector</i>, vol. III, CGCED, 2000)¹. 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluación final – Se pueden calcular indicadores de la tramitación de causas sobre la base de los informes de la Secretaría. 	<ul style="list-style-type: none"> Se mantiene la voluntad política de seguir aplicando la Estrategia de Reforma de la Administración de Justicia después de las elecciones.

¹ La encuesta del Grupo de Cooperación para el Desarrollo Económico de la Región del Caribe (CGCED) (2000) abarca diez países, incluida Guyana, y presenta una retroinformación cuantitativa y cualitativa detallada sobre las percepciones de usuarios y agentes con respecto a la eficiencia, efectividad y accesibilidad de los servicios de una amplia gama de instituciones de la administración de justicia. La encuesta de 2000 sirvió de punto de comparación para la Estrategia de Reforma de la Administración de Justicia.

Resumen descriptivo	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
	<ul style="list-style-type: none">El porcentaje de acciones penales que prosperan es como mínimo de 25%. Punto de comparación: En 2005, prosperó el 10% de las acciones penales (<i>Secretaría de la Estrategia de Reforma de la Administración de Justicia, enero de 2006</i>).El porcentaje de causas resueltas / causas remitidas a mediación es como mínimo de 25%. Punto de comparación: Desde octubre de 2003, el 12% de las causas remitidas ha sido resuelto por el Centro de Mediación del Tribunal Superior de Justicia (<i>Mediation Center Report, octubre de 2005</i>).	<ul style="list-style-type: none">Evaluación final e informes de la Secretaría.Evaluación final e informe del Centro de Mediación.	<ul style="list-style-type: none">- La administración de justicia dispone de recursos suficientes para desempeñar sus funciones.- El Parlamento sanciona las reformas legislativas.

Componentes del programa	Productos del proyecto ²	Medios de verificación	Supuestos
1. Mejora de la capacidad institucional	<p>Componente de reformas de política</p> <p>A) Después del primer tramo, se revisa y redacta el régimen jurídico para mejorar la prestación de servicios, incluido lo siguiente: Un régimen para garantizar una mayor autonomía al Poder Judicial con relación a la aprobación de su presupuesto y la gestión de sus gastos. B) Después del segundo tramo, se revisa y aprueba el régimen jurídico para mejorar la prestación de servicios, incluido lo siguiente: i) Políticas, normas y reglamentos de la Comisión de Servicios Judiciales; ii) normas de procedimiento civil del Tribunal Superior de Justicia; iii) código de conducta y ética para jueces y magistrados; iv) leyes de procedimiento en lo civil y penal; la Comisión de Servicios Judiciales entra en funciones conforme a las nuevas políticas, normas y reglamentos; y v) un régimen jurídico de autonomía presupuestaria.</p> <p>Componente de inversiones</p> <ul style="list-style-type: none"> Para el fin del programa, se reduce en 100% el número de causas acumuladas. Punto de comparación: Al fin de 2005, el número de causas acumuladas ascendía a 12.000 (<i>Secretaría de la Estrategia de Reforma de la Administración de Justicia, enero de 2006</i>). Se adoptan nuevas normas y mecanismos internos para velar por una mayor rendición de cuentas en la administración de justicia. A los 12 meses: <ul style="list-style-type: none"> Se han formulado y aprobado las políticas de gobernanza y las normas operativas de la Secretaría de la Comisión de Servicios Judiciales; La Secretaría ha adoptado un manual de gestión financiera interna para garantizar la gestión adecuada de los recursos financieros del Poder Judicial; y En la Secretaría se crea una unidad de auditoría interna para efectuar auditorías internas a nivel de todo el Poder Judicial. 	<ul style="list-style-type: none"> Gaceta Oficial. Informes anuales del programa. Informes anuales del programa e informes de la Secretaría. 	<ul style="list-style-type: none"> Voluntad política de llevar adelante la Estrategia de Reforma de la Administración de Justicia. Los compromisos de políticas se cumplen oportunamente. Las instituciones de la administración de justicia están dispuestas a actuar en coordinación. Los empleados de la administración de justicia muestran una actitud favorable respecto de la reforma. La administración de justicia puede retener funcionarios calificados. La administración de justicia recibe oportunamente los recursos financieros presupuestados.

² Cronologías medidas a partir de la fecha de elegibilidad del programa.

Componentes del programa	Productos del proyecto ²	Medios de verificación	Supuestos
	<ul style="list-style-type: none"> • Se instituyen nuevos procedimientos de tramitación de causas en el Tribunal Superior de Justicia y en los tribunales de primera instancia. <ul style="list-style-type: none"> o A los 12 meses, el Tribunal Superior de Justicia está aplicando los nuevos procedimientos. o Para el fin del programa, los nuevos procedimientos se aplican plenamente a nivel de todos los tribunales. • Instalación de un SIG y de un sistema de contabilidad modernos. <ul style="list-style-type: none"> o A los 12 meses, se ha diseñado un SIG moderno. o A los 24 meses, el sistema está totalmente instalado en el Tribunal Superior de Justicia. o Para el fin del programa, el sistema se aplica plenamente a nivel de todos los tribunales. • Se ha instalado el nuevo sistema de gestión de los recursos humanos en la Secretaría del Tribunal Superior de Justicia. <ul style="list-style-type: none"> o A los 24 meses, se han formulado y aprobado las políticas y programas de recursos humanos (incluidos los relativos a reorganización, elaboración de descripciones de cargos y normas de desempeño y capacitación y educación continua para los funcionarios de tribunales). • Reorganización funcional y operativa de la Fiscalía. <ul style="list-style-type: none"> o A los 12 meses, se ha planificado la reorganización funcional y operativa de la Fiscalía. o A los 24 meses, se ha reorganizado la Fiscalía. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informes anuales del programa, basados en i) los informes de la Secretaría; ii) el informe de los consultores; y iii) los informes de evaluación de la capacitación. • Informes anuales del programa, basados en i) los informes de la Secretaría; ii) el informe de los consultores; y iii) los informes de evaluación de la capacitación. • Informes anuales del programa, basados en los informes de los consultores. 	

Componentes del programa	Productos del proyecto ²	Medios de verificación	Supuestos
	<ul style="list-style-type: none"> Se imparte formación a los fiscales de la Fiscalía y de la Policía que intervienen en el enjuiciamiento de delitos penales. <ul style="list-style-type: none"> A los 12 meses, se ha impartido formación al 100% de la plantilla de la Fiscalía en el enjuiciamiento de delitos graves y delitos relacionados con estupefacientes. Para el fin del programa, se habrá impartido formación al 100% de los funcionarios de la Fiscalía y de la Policía en los demás delitos penales. Educación continua de jueces y magistrados. <ul style="list-style-type: none"> A los 36 meses, como mínimo el 80% de los jueces y magistrados ha participado en programas de educación continua. 	<ul style="list-style-type: none"> Informes anuales del programa, basados en i) los datos administrativos de la Policía y ii) los informes de evaluación de la capacitación. Informes anuales del programa, basados en i) los informes de la Secretaría; y ii) los informes de evaluación de la capacitación. 	
2. Fortalecimiento de los vínculos entre las instituciones	Componente de reformas de política <ul style="list-style-type: none"> A) Después del primer tramo, se ha revisado y aprobado el régimen jurídico para fortalecer las vinculaciones entre las instituciones, incluido lo siguiente: i) el Comité Directivo; ii) el plan estratégico de reforma de la Policía; iii) el plan estratégico de reforma penitenciaria; y iv) el plan funcional y operativo de las relaciones entre la Policía y la Fiscalía. B) Después del segundo tramo, i) se ha revisado y aprobado la Ley de pruebas; ii) se elabora y aprueba el régimen de seguimiento y evaluación y se completa el primer informe semestral; y iii) se ha puesto en marcha la exclusión gradual del enjuiciamiento de delitos graves y delitos relacionados con estupefacientes del ámbito jurisdiccional de la Policía. 	<ul style="list-style-type: none"> Gaceta Oficial. 	

Componentes del programa	Productos del proyecto ²	Medios de verificación	Supuestos
	<p>Componente de inversiones</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inventario integral de los procesos de cada institución de la administración de justicia. <ul style="list-style-type: none"> o A los 18 meses, se ha levantado el inventario como mínimo del 50% de los procesos de la administración de justicia. o A los 36 meses, se ha levantado el inventario de toda la administración de justicia. o A los 12 meses, se ha adoptado el régimen de seguimiento y evaluación de la aplicación de la Estrategia de Reforma de la Administración de Justicia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informes anuales del programa, basados en los informes de los consultores. 	
<p>3. Mejora del acceso a la justicia</p>	<p>Componente de reformas de política</p> <ul style="list-style-type: none"> • A) Después del primer tramo, se ha restablecido la Comisión de Revisión Legislativa. B) Después del segundo tramo, se revisa y aprueba el régimen jurídico para mejorar el acceso a la justicia, incluido lo siguiente: i) la Ley de ejercicio de las profesiones jurídicas y ii) la Ley de vías alternativas de solución de diferencias. <p>Componente de inversiones</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo y puesta en práctica de alianzas para servicios de resolución comunitaria de conflictos. <ul style="list-style-type: none"> o A los 24 meses, se ha elaborado una lista de las normas aprobadas por el Ministerio de Asuntos Jurídicos. o A los 36 meses, se ha elaborado un directorio de mediadores aprobados por el Ministerio de Asuntos Jurídicos. • Servicios de asistencia jurídica. Para el fin del programa, se encuentra en funciones un centro de asistencia jurídica en New Amsterdam y en Essequibo Coast. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gaceta Oficial. • Informes anuales del programa, basados en i) los informes de las organizaciones de resolución comunitaria de conflictos y ii) los informes de los consultores. • Informes anuales del programa, basados en los informes de los consultores. 	

Componentes del programa	Productos del proyecto ²	Medios de verificación	Supuestos
	<ul style="list-style-type: none"> • Sensibilización pública en asuntos jurídicos. <ul style="list-style-type: none"> o A los 12 meses, se han formulado la estrategia nacional de sensibilización y la estrategia de comunicación. o A los 24 meses, se ejecuta la campaña de sensibilización en asuntos jurídicos con los medios de difusión. • Boletines de jurisprudencia. Para el fin del programa, se ha actualizado el 100% de los boletines de jurisprudencia (<i>law reports</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> • Informes anuales del programa, basados en los informes de los consultores. • Informes anuales del programa, basados en los informes de los consultores. 	

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE-___/06

Guyana. Préstamo ___/SF-GY a la República Cooperativa de Guyana
Modernización del Sistema de Administración de Justicia

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

Autorizar al Presidente del Banco o al representante que él designe, para que en nombre y representación del Banco, proceda a formalizar el contrato o contratos que sean necesarios con la República Cooperativa de Guyana, como Prestatario, para otorgarle un financiamiento destinado a cooperar en la ejecución del programa de modernización del sistema de administración de justicia. Dicho financiamiento será por una suma de hasta US\$25.000.000, o su equivalente en otras monedas, excepto la de Guyana, que formen parte de los recursos del Fondo para Operaciones Especiales del Banco ("FOE"), y se sujetará a los Plazos y Condiciones Financieras y a las Condiciones Contractuales Especiales del Resumen de Proyecto de la Propuesta de Préstamo.

LEGIII/GY-740451-06
GY-L1009